

Rea Campos, Carmen Rosa. **Conflictos y alianzas alrededor de lo indio en la construcción democrática de Bolivia como Nación: movimientos y luchas indias preelectorales 2002.** *Informe final del concurso: Movimientos sociales y nuevos conflictos en América Latina y el Caribe.* Programa Regional de Becas CLACSO. 2003

Disponible en la World Wide Web:

<http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/becas/2002/mov/rea.pdf>

www.clacso.org	RED DE BIBLIOTECAS VIRTUALES DE CIENCIAS SOCIALES DE AMERICA LATINA Y EL CARIBE, DE LA RED DE CENTROS MIEMBROS DE CLACSO http://www.clacso.org.ar/biblioteca - biblioteca@clacso.edu.ar
----------------	--

**CONFLICTOS Y ALIANZAS ALREDEDOR DE LO INDIO EN LA CONSTRUCCION DEMOCRATICA DE BOLIVIA COMO NACION:
Movimientos y luchas indias preelectorales 2002**

Carmen Rosa Rea Campos*

INTRODUCCION

“Los ponchos, las abarcas y las polleras ya no se perderán en medio de trajes y corbatas. Ahora los quechuas y aymaras representan un número importante en el hemiciclo parlamentario...” (30 días de noticias, agosto 2002)

En un contexto de crisis económica, social y política marcado por índices alarmantes de desempleo, pobreza y marginalidad social, como reflejo de los efectos de la economía neoliberal, y la pérdida de credibilidad hacia los partidos políticos tradicionales, Bolivia está viviendo un proceso de reconfiguración de su mapa sociopolítico y una revitalización de su movimiento social campesino/indio, el mismo que en décadas previas mostraba un debilitamiento de sus formas corporativas de acción social.

Así, la elección de 2002 se constituye en un indicador del proceso de reconfiguración del escenario político en el que actualmente está inscrito Bolivia, teniendo como hito principal los sucesos conflictivos del 2000¹.

Con el ascenso del Movimiento al Socialismo (MAS-IPSP)² como segunda fuerza política del país³ y los resultados logrados por el Movimiento Indígena Pachakuti (MIP) que participó por primera vez en las elecciones nacionales, se marca un nuevo hecho histórico desde el retorno al sistema democrático, dos décadas atrás: la irrupción en el escenario parlamentario de representantes de uno de los sectores más excluidos social, económica y políticamente, los campesinos/indios e indígenas, con el 26% de la cuota de poder del Congreso Nacional Boliviano.

¿Qué es lo que provocó este salto, esta irrupción de los representantes campesinos/indios en el Parlamento, si experiencias electorales anteriores mostraban el poco apoyo de este sector hacia partidos políticos indios que surgieron desde la década de los 70?. ¿Cómo la articulación entre las luchas indias, los

conflictos internos, las alianzas políticas desde las diferentes vertientes de lo indio (aymaras, productores de coca, quechuas, los indígenas del oriente) son parte de la estrategia de un sólo movimiento que logra cuotas de poder en base a la articulación de elementos básicos de identidad como: *Lo indio*, el sentimiento antineoliberal y la ciudadanía política?. ¿Cómo se reconfiguran, articulan y expresan las estrategias de acción política de estos indios?, y ¿cómo a partir de esta rearticulación interna están reconfigurando el país abigarrado que no logra definirse como una nación y una expresión del “nosotros”?

La investigación cuyos resultados se presenta en este artículo, consideró las diferentes estrategias de acción política del sector campesino/indio de los dos últimos años (2000 al 2002), tomando como base metodológica el análisis relacional y de procesos. Al mismo tiempo, vio necesario retomar algunas consideraciones conceptuales sobre Nación y movimiento social, que se describen en los párrafos posteriores, para una mejor comprensión del tema objeto de investigación.

Con la premisa de la existencia de aproximaciones y no teorías generales sobre el concepto de Nación, retomamos los aportes de Zavaleta Mercado para quién Nación es la construcción del ‘yo colectivo’”, de una identidad colectiva o histórica formada por individuos jurídicamente libres supeditados a una forma de colectividad, con un cierto grado de centralidad y homogeneidad entre elementos decisivos que concurren al régimen productivo (Zavaleta, 1990). Siguiendo al autor, los Estados Nación son resultado de la culminación de Nación que supone superar la situación de abigarramiento de una sociedad, es decir, la sobreposición desarticulada de diferentes sociedades, con diferentes modos de producción, diversas concepciones de mundo que coexisten estableciendo relaciones de dominación y distorsión de una sobre otra (Tapia, 2002: 10).

En esta misma línea, Dussel considera que no se puede hablar de Estados Nación sino de “Estado moderno” formado desde la dominación uninacional sobre otras naciones (Dussel, 2002: 231) en el que surgen movimientos étnico indígenas, con reivindicaciones de identidad y de autonomía política. (Stavenhagen en Dussel, 2002: 231), que cuestionan la existencia de Estados con un formato institucional monocultural. Este es el caso boliviano.

Para entender la acción política india en una sociedad abigarrada como Bolivia nos interesa recuperar la categoría sociológica de movimiento social que hace referencia a la “... movilización y acción política de algunas fuerzas o parte de la sociedad con la finalidad de reformar alguna de sus estructuras, sino que también son, en algunos casos, movimientos de sociedad en proceso de conflicto más o menos colonial en el seno de un país estructuralmente heterogéneo” (Tapia, 2001: 29), que se configura cuando la acción colectiva empieza a desbordar los lugares estables de la política en el seno de la sociedad civil y del Estado; y se mueve a través de la sociedad buscando aliados en torno al cuestionamiento de los criterios y formas de distribución de la riqueza social o los principios de organización de la sociedad, Estado, gobierno (Ibid: 33-35).

Por otra parte, para comprender el acción política india como un movimiento de sociedad es importante recuperar las múltiples dimensiones de la condición sujeto indio: su condición de clase, su condición étnico-cultural que hace referencia a su situación de “marginalidad sociocultural” y societal y su condición racial que refiere al “hecho colonial”, a la posición de inferioridad frente al resto de la sociedad y que vincula rasgos genéticos, biológicos y físicos con el carácter moral e intelectual del grupo (Esposito: s/f)⁴.

También entenderemos el movimiento social como un proceso en el que se debe reconocer: 1) una relativa exterioridad que permite desplegar las acciones contra lo que se percibe como dominación, privación, explotación, control; y 2) un proceso de autonomía que se estructura en torno a interacciones entre adversarios, cuyas prácticas se oponen dentro de un campo social y cultural compartido (Barrera, 2002:93), orientado en forma expresivo-simbólica y racional-estratégica, que implica una correlación entre la lógica de la acción estratégica y la producción y reforzamiento de la identidad colectiva (Barrera, 2002:93). Esta correlación permite el despliegue de la acción colectiva de los “no” lugares de la política hacia los lugares estables de la política.

El artículo en su primera parte hace referencia a un breve análisis histórico y contextual de la acción política del sujeto indio desde la Revolución del 1952, poniendo énfasis al periodo del 86 al 97 donde se evidencia un proceso de fraccionamiento y el surgimiento de nuevos actores del movimiento campesino/indio. La segunda parte, pone énfasis en la reconstrucción de identidades como resultado de las luchas indias de abril y septiembre del 2000, que trasciende luchas localistas hacia una reafirmación de las identidades colectivas e interpelación al Estado y la sociedad con estrategias movilizadoras y que hacen evidente la débil gobernabilidad del Estado boliviano en manos de una élite económica desgastada políticamente y la ruptura definitiva del pacto social generado en el periodo del Nacionalismo Revolucionario.

La tercera parte se remite a un análisis de la constitución de los instrumentos políticos indios como una prolongación de la acción colectiva al campo de la política institucionalizada y una estrategia de acción política que intenta transformar el orden social y político de la sociedad boliviana, aunque en algunos casos con propuestas que parecen contradictorias pero que son acciones complementarias para quienes intentan superar la exclusión sociocultural y política. En la cuarta parte, se trata de ver qué pasó después de los resultados electorales, cómo la presencia de representantes indígenas dentro del Parlamento aún no logra revertir el poder en manos de la élite política, cómo esta situación está modificando la capacidad movilizadora de los actores sociales y cómo los líderes indios, ahora representantes políticos legalmente reconocidos por la práctica electoral, se desenvuelven en esa doble dinámica y direccionalidad: las luchas sociales y la representación política parlamentaria.

La quinta parte esta dedicada a las conclusiones de la investigación que puntualizan el nuevo contexto sociopolítico boliviano marcado por una ruptura de pactos sociales,

y la necesidad de constituir nuevos pactos sociales que reflejen la urgencia de reconfigurar la estructura social Boliviana modificando la posición de subalternidad de los sujetos indios que corresponden a diferentes formaciones societales subordinadas por el Estado uninacional.

LA INDIANIDAD: De la autonomía política a la fragmentación corporativa

Bolivia desde su constitución como Estado es una sociedad compleja, “abigarrada” y heterogénea por su composición societal. En el coexisten diversas formaciones societales con formas culturales, de organización, de autoridad e incluso de administración y ordenamiento del espacio; con modos de producción o economías distintas, desde precapitalistas coexistiendo con formas capitalistas (Tapia, 2002) y economías transnacionales que responden a la dinámica económica actual.

El proceso histórico Boliviano se ha encargado de mostrar esta complejidad, sobre todo, a partir de las luchas de quienes son parte de estas “formaciones societales subalternas” en sus intentos de modificar su condición de subordinación. Así, los levantamientos de Tupaj Katari en 1781, de Zarate Willka en 1899 y otros⁵ a tiempo de mostrar esta complejidad societal, se constituyen en luchas indias de resistencia al dominio colonial de los criollos y mestizos y de restitución de su condición de naciones.

El proceso iniciado tras la Revolución Nacional de 1952 protagonizado por sectores populares, obreros e indios, que puso fin al sistema oligárquico-hacendal, constituyó un intento de superar este abigarramiento societal a partir del “Proyecto del Nacionalismo Revolucionario” (León, 1990), con el establecimiento del “pacto social” entre indios –convertidos desde entonces en “campesinos”- y pequeña burguesía articulada al partido del MNR, para aperturar procesos de integración y ciudadanía de los primeros, implicando a su vez la renuncia a las aspiraciones de autodeterminación.

Sin embargo, este “pacto” no logró una real integración del indio como sujeto constitutivo de la Revolución de 1952 (León, 1990) y del proyecto del Nacionalismo Revolucionario. Contrariamente, la pequeña burguesía en el poder logró controlar los sindicatos campesinos estableciendo milicias campesinas. Así, los indios que habían dejado o de ser “pongos⁶” de los hacendados pasaron a convertirse en “pongos políticos” al servicio de las nuevas élites políticas -MNR, 1952-1964, y de los gobiernos militares, 1964-1978, (Calderón y Dandler, 1984; Rivera, 1994; Rodríguez, 1993)-, que supuso una agudización de su situación de subordinación, discriminación y exclusión marcada por el deterioro de sus condiciones de vida, la acentuada minifundización de sus tierras, el debilitamiento de sus formas de organización tradicional (Patzí, 1999), la alta migración a centros urbanos en condiciones de precariedad, mostrando el casi nulo proceso de “ciudadanización” por el que habían apostado.

Los escasos y decepcionantes resultados del proceso de “ciudadanización” posibilitaron que una parte de este sector, fundamentalmente aymara, gestara a fines de los años 60’su propio movimiento político: el katarismo⁷. A partir de la recuperación de la simbología de la lucha de Tupak Katari, los aymaras en su condición de campesinos/indios recuperaron la autonomía de la organización campesina en términos sindicales y políticos⁸. Uno de los hitos importantes en este proceso fue la ruptura del “pacto militar campesino” en 1974, resultado de la “Masacre del Valle” que sufrieron durante el gobierno del Gral. Banzer.

En 1978 la corriente Katarista retoma el control de la Confederación Sindical de Campesinos, para constituirse en una instancia autónoma y buscar la unidad del sector⁹. Un año más tarde (1979), se conforma la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), cuya autonomía y fuerza como sistema de representación del sector campesino/indio bajo la corriente katarista de Genaro Flores, que combinaba el componente étnico cultural y las reivindicaciones de clase, duró de 1979 a 1984. En este periodo la CSUTCB expresó la autonomía de los intereses sociales del campesinado y la independencia frente a la COB, el Estado y los Partidos Políticos (Calderón: 1999:446).

A partir de 1984, periodo de agudización de la crisis económica nacional durante el gobierno de la UDP¹⁰ (1982-1985), esta organización entró en una etapa de fraccionamiento por varias razones: 1) las contradicciones entre katarismo sindicalista que demanda el reconocimiento de la pluriculturalidad y el katarismo indianista que postula la autodeterminación de las naciones oprimidas; 2) diversos partidos políticos de izquierda y derecha ven en la CSUTCB el escenario perfecto para capturar potenciales electores; 3) la fragmentación por la administración de la Corporación Agropecuaria Campesina (CORACA) creada durante el gobierno de la UDP [Patzí, 1999; Rivera: 1987, CSUTCB, s/f] que de “brazo económico” del campesinado se convirtió en el “botín de guerra” de los diferentes partidos políticos incluyendo los kataristas; y, 4) el distanciamiento entre la dirigencia sindical nacional, involucrada en actos de corrupción, y las bases sociales que no ven reflejadas sus intereses comunales en la CSUTCB.

A este periodo de fraccionamiento se suma el debilitamiento del movimiento popular en general, con la adopción de las nuevas políticas económicas y la reestructuración del Estado iniciado en 1985 por el gobierno de Víctor Paz Estensoro¹¹. Así, las luchas emprendidas por los campesinos/indios en 1978 lideradas por los kataristas para derrocar la dictadura ya no se repetirían en los años siguientes, prácticamente el movimiento estaba debilitado y dividido.

Esta división se profundiza en 1988 durante el Primer Congreso Extraordinario de la CSUTCB. Resultado de la misma, la corriente izquierdista liderizada por el Movimiento Campesino de Base (MCB), retoma el control de la CSUTCB, plantea la alianza Obrero-Campesino y reivindica a la izquierda como instrumento de lucha del movimiento (Patzí, 1999). En cambio, los indianistas se separan definitivamente para constituir otro frente de lucha social: la “Ofensiva Roja de Ayllus Tupakataristas” y con la formación del Ejército Guerrillero Tupaj Katari (EGTK) en 1989¹² proclama la

lucha armada como mecanismo de confrontación con el Estado Q'ara expresión de la "minoría colonial" que los excluye como nación y los discrimina como raza.

La desmovilización del movimiento campesino/indio (1985-1998) no sólo fue resultado del fraccionamiento de la organización sindical, sino también de la apropiación de la demanda de reconocimiento de su pluriculturalidad por el Estado, en función a los acuerdos internacionales establecidos que priorizan el tema de los derechos indígenas de los llamados "pueblos selvícolas"¹³. Esta recuperación de los pluri y multi permitió replantear la integración del sujeto indio, pero ya no por vía de la homogeneización, sino por el reconocimiento de su "diferencia" lingüística y cultural pero no societal; y como una forma de legalizar y volver "sociales" a las reformas neoliberales implementadas por los gobiernos de turno.

Este proceso se inició con la alianza y la llegada al poder del MNR (principal impulsor de la reestructuración del Estado Nacionalista hacia el Estado Neoliberal) y el MRTKL liderizado por Víctor Hugo Cárdenas¹⁴, y continua con la modificación del primer artículo de la CPE, que plantea el reconocimiento de Bolivia como un país pluricultural y multilingüe, y otros cambios normativos (Ley INRA, Reforma Educativa, Ley de Participación Popular, Ley Forestal) que dan cuenta del carácter pluricultural del país.

En esta etapa de desmovilización y de debilitamiento orgánico, surgen otros sectores de la indianidad organizados y movilizados en torno a sus intereses sectoriales. Tal es el caso de indígenas de las tierras bajas¹⁵ y los productores cocaleros del trópico de Cochabamba.

El movimiento indígena de las tierras bajas surge a mediados de los 80' con influencia de ONG's que fungieron como intermediarios culturales¹⁶ (Patzí, 1999: 238). Sus luchas y movilizaciones marcan el reconocimiento de la Bolivia diversa y pluricultural, y su reconocimiento como actores políticos. Este es un intento de superar la marginalidad por parte del Estado y la Sociedad Civil, que los había marginado bajo la categoría de "grupos selvícolas" y cuyos territorios eran objetos de concesión a grandes empresarios, muy vinculados con las élites que controlaban el poder estatal.¹⁷

Por su parte, el movimiento cocalero surge a fines de los 80' en un intento de hacer frente a la presión estatal cuyas políticas de erradicación de los cultivos de coca vulneraba y vulnera su condición de vida ya agravada, pues la coca constituye "la única alternativa que les quedaba al ser víctimas (...) del abandono del campo como de la crisis económica y de la recesión generada por la política neoliberal" (Albó, 1993:21).

Ya entre 1987 y 1993 este sector indio había puesto en evidencia su capacidad de interpelar al Estado¹⁸, paradójicamente como resultado de la represión estatal por un lado, y por otro, de la capacidad de constituirse en un poder local con mayor influencia que los gobiernos municipales y el aparato estatal. Esta constatación permitió que la acción colectiva de los cocaleros se expandiera al control de los

espacios políticos institucionalizados y a la influencia hacia el conjunto de las organizaciones indígenas y campesina del país.

La experiencia de acceder a los espacios políticos institucionalizados para, desde allí, abrir su campo de lucha frente a la política estatal de erradicación del cultivo de coca permitió a los coccaleros impulsar con diferentes sectores de la indianidad organizados en diferentes sistemas de representación –CSUTCB, Confederación Nacional de Colonizadores, Federación Nacional de Mujeres Bartolina Sisa- la formación de un instrumento político propio: la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) que, al tiempo de permitir articular al campesinado, permita superar el control de partidos políticos tradicionales causa de su fragmentación.

Pobreza india en el marco de cambios normativos

Esta dinámica conflictiva de la organización social y el surgimiento de nuevos actores sociales indios se desarrolla en el contexto de transformación del aparato estatal boliviano y de la política económica nacional, iniciada en 1985, para superar el colapso de la economía boliviana durante el gobierno de la UDP como efecto de la elevada deuda externa con altas tasas de interés en el que habían incurrido los gobiernos dictatoriales de Banzer y García Mesa. El déficit fiscal, las elevadas tasas de inflación que alcanzaron en 1985 al 22.000% (Toranzo, 2002); la caída del precio internacional del estaño y los efectos de la crisis internacional de la economía dieron cuenta del fracaso del Estado Nacionalista Empresario, que en cuarenta años, “no pudo crear una economía suficientemente robusta como para resistir al embate de la crisis de deuda externa” (Morales, 1999:183)

La transformación de la política económica y del aparato estatal, ahora de corte neoliberal, tuvo resultados positivos a corto plazo en tanto logró bajar la tasa de inflación unida a una escasa recuperación en las actividades económicas (Rodríguez, 1989). Sin embargo, 15 años después de iniciado la implementación del modelo y los cambios normativos para efectivizar el mismo, los resultados no logran mejorar la condición de vida y de ciudadanía de las poblaciones indígenas, contrariamente éstas se vieron agravadas.

Datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) muestran que entre 1985 y 2001 la situación de pobreza de ese sector ha disminuido sólo en el 0.4%. La pobreza en el área rural asciende a 76%, cifra muy alentadora si contrasta con los datos de pobreza en municipios rurales que fluctúan entre el 90 y el 99% de la población total, la mayoría de algún origen étnico que habita en las zonas deprimidas afectadas por la contaminación de sus recursos, la degradación de los suelos, la minifundización de las tierras, la falta de sistemas de riego, de caminos que les impide sacar sus productos al mercado y otro tipo de carencias, mostrando así la ausencia del Estado y el desvanecimiento de sus aspiraciones de integración a la sociedad mestiza.

Para mencionar un ejemplo, la Ley INRA promulgada en 1996 con el objeto de resolver el problema de la tenencia de la tierra y la inequidad de la distribución a la

que se llegó con la reforma agraria de 1953 no presenta cambios para los campesinos/indios del país. Hasta el 2001 de las 36 demandas territoriales presentadas en 1996 sólo seis lograron titularse con recortes significativos de las superficies; en tanto, otras demandas están paralizadas por los conflictos de sobreposición con propiedades de empresarios ganaderos y madereros con influencia en el poder estatal. Mientras lo anterior pasa en las tierras bajas, en las tierras altas no se pudo y no se puede superar el problema de la minifundización o lo que los campesinos/indios en su desesperación denominan “surco fundios”, pequeñas parcelas que ya no permiten la producción para su autoconsumo¹⁹.

El otro porcentaje de esta población pobre está conformado por migrantes de zonas rurales, ubicados en las periferias de las ciudades troncales del país, igualmente marginadas social y económicamente. La falta de educación y cualificaciones los ubica en los últimos peldaños de la actividad económica y la carencia de puestos laborales formales les ha impedido obrerizarse” pero si “informalizarse” como comerciantes minoristas, empleados de servicios, etc. Así, se hace evidente que la pobreza Boliviana tiene cara india.

En este contexto social marcado por la agudización de la pobreza como efecto de la implementación de la política neoliberal, a la que se suma la crisis económica mundial de 1999 y la crisis del sistema político marcado por la manipulación y la corrupción, y pese a los esfuerzos de los gobernantes por diseñar políticas sociales que intentan superar la situación de pobreza como el Diálogo Nacional promovido desde 1997, y la Estrategia de Reducción de la Pobreza en Bolivia, fomentada por las instancias de cooperación internacional, a fines de los 90 se vislumbra el resurgimiento de la acción colectiva india. Hasta entonces sólo los productores de coca constituían el sector movilizadofrente a las políticas económicas.

EL RETORNO DEL PACHAKUTI²⁰: Luchas indias en los albores del nuevo milenio.

Bolivia empezó el nuevo milenio en un ambiente socialmente convulsionado donde el protagonista no era el movimiento obrero que había liderizado las luchas sociales desde la década de los 30’, sino el sector de la indianidad. Campesinos/indios de las zonas andinas, campesinos/indios que se habían tropicalizado y convertido en productores de coca e indígenas de las tierras bajas protagonizaron entre el 2000 y 2002 el 27%, 43% y el 10% respectivamente de las movilizaciones de dicho sector, pese a la “voluntad política” del gobierno de turno (Hugo Banzer) de hacer “partícipes” a los excluidos en la búsqueda de soluciones a la crisis económica y política, promoviendo el Segundo Diálogo Nacional.

Las protestas indias de abril y septiembre del 2000 trascendieron las luchas sectoriales y localistas hacia una reafirmación de las identidades colectivas, la interpelación al Estado y la sociedad con estrategias movilizadoras que evidenciaron la débil gobernabilidad del Estado boliviano en manos de una élite económica desgastada políticamente.

La movilización india de Abril y el cerco económico de septiembre

Mientras la ciudad de Cochabamba vivía un “alzamiento social” por la elevación de las tarifas de agua que ascendían en un 300%, efectuada por la transnacional “Aguas del Tunari”, y la posibilidad de concesionar los pozos de agua de los que se provee la población urbana como rural²¹; en el altiplano paceño, en las provincias aymaras de Larecaja, Omasuyos, Camacho, Saavedra, Manco Kapac, Aroma, Los Andes y otros, se iniciaba el bloqueo de caminos que se extendió a otros cuatro departamentos del país (Oruro, Chuquisaca, Beni y Potosí)²²

Esta protesta india se inició demandando al gobierno de turno (Gral. Banzer) el cumplimiento de acuerdos postergados desde 1998 (participación de la CSUTCB en la fiscalización del poder ejecutivo, creación de un banco campesino para la distribución de créditos accesibles, aplicación de la educación intercultural y bilingüe, creación de una universidad agraria, entre otros), en un intento de remplazarlos por acciones focalizadas en el marco de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERBP). La protesta se agudizó con la intención gubernamental de impulsar la aprobación de la Ley del Recurso Agua o Ley de Saneamiento Básico, que convertía el agua en un recurso concesionable.

La movilización india expresada en un bloqueo de caminos que se prolongó por 11 días tuvo características *sui generis*. Por primera vez se ejecutaba el “Plan Pulga”, como lo denominara Felipe Quispe “El Mallku”²³, secretario ejecutivo de la CSUTCB, que consistía en el bloqueo de caminos de manera extensiva a lo largo y ancho de las carreteras donde las poblaciones rurales tuvieran acceso para el “sembrado de piedras”. A esta estrategia se incorporaron otras como la suspensión del envío de productos agrícolas a los centros urbanos.

Después de violentos enfrentamientos entre campesinos aymaras y la fuerza represiva estatal, el gobierno se vio presionado a postergar la aprobación de la Ley del Recurso Agua y firmar un nuevo convenio de compromiso para el cumplimiento de las demandas postergadas, además de firmarlo en una de las poblaciones rurales como “símbolo” de la resistencia india, pero sobretudo como una victoria política, pues el “indio”²⁴ había doblegado la fuerza estatal y los había obligado a conocer la realidad campesina/india que desconocen.

Esta irrupción india constituyó el “primer ensayo”, como plantea F. Quispe, pues el “segundo” se inició en junio de 2000 pero se agudizó durante el mes de septiembre en un escenario nacional de profunda conflictividad social²⁵. El “Plan Pulga” de abril se extendió a nivel nacional tomando el eje troncal del país por el que pasa toda la economía nacional (La Paz-Cochabamba-Santa Cruz). Nuevamente las poblaciones aymaras del departamento de La Paz, como Achacachi “bastión del Mallku”, fueron los protagonistas junto, aunque escindidos, con la población cocalera del Trópico y la población quechua de los valles de Cochabamba, que habían tomado el control de la carretera Cochabamba-Santa Cruz y Cochabamba-Oruro.

Al bloqueo de caminos se sumó el “bloqueo económico” que consistía en la suspensión del envío de productos agropecuarios de las comunidades indígenas hacia la sede de gobierno y hacia la ciudad de Cochabamba, obligando al gobierno a transportar los productos alimentarios por vía aérea. Así, se revivía el cerco que se había impuesto durante el levantamiento de Tupaj Katari en 1781.

El bloqueo económico duro poco más de tres semanas y tras los enfrentamientos violentos, la expulsión de las fuerzas del orden en la población de Achacachi y una población urbana aterrada y sofocada por la escasez de productos, el gobierno se vio obligado a firmar nuevos acuerdos que sobrepasaban los 50 puntos de demanda. La victoria social y política de esta movilización fue la recuperación simbólica de poder de las poblaciones campesino/indias, principalmente aymaras. En Achacachi la fuerza del orden estatal fue prácticamente reemplazada por el control comunal, mostrando el dominio indio sobre su propio territorio.

Mientras los aymaras movilizados negociaban sus demandas con el gobierno, los cocaleros continuaban con el bloqueo de caminos demandando el “cato de coca”²⁶ y la paralización de la construcción de cuarteles en dicha zona. Semanas después lograron negociar un convenio con el gobierno que dejó sin efecto la construcción de cuarteles y la posibilidad de desarrollar un estudio de mercado sobre la demanda legal de coca, que aún no logra efectivizarse.

Las movilizaciones continuaron el 2001 y el 2002, de manera más sectorializada y localista, marcada por la indignación popular por el desafuero del principal representante indio²⁷ en el Parlamento (Evo Morales), por un lado y por otro, la manipulación de la propuesta de la Ley de Modificación de la Constitución Política del Estado que, en pleno proceso electoral, llevó a los indígenas de las tierras bajas a protagonizar la Marcha por la “Asamblea Constituyente” como una demanda para superar la exclusión política que no logra ser superada por la práctica del voto de la que gran parte de éstos no participa por su condición de “indocumentados”²⁸.

Entre las condicionantes políticas que generaron las protestas indias, sobretudo de abril y septiembre de 2000, está la crisis del sistema político caracterizado por un Poder Legislativo subordinado al Poder Ejecutivo, restando al primero la capacidad y credibilidad para formular propuestas políticas para superar la crisis económica; y, un gobierno políticamente débil y con un “vacío de poder” que, ante la ausencia de un Plan de Gobierno, intentaba lanzar un Plan de Reactivación Económica con la participación de una minoría de tipo empresarial, marginando al resto de la población partícipe de reproducción económica-social del país.

A lo anterior se sumó el intento del gobierno de poner en vigencia una Ley que convertía el agua, un bien común y escaso, en mercancía, en recurso concesionable a empresas “rentables” desconociendo los derechos de las poblaciones rurales que no sólo usufructúan el recurso sino que han acumulado un capital social y material en torno al mismo. Esto puso en evidencia que la élite criolla no solamente subordina los

derechos de los indígenas sino que desconoce sus formaciones societales en beneficio de sus intereses económicos mezquinos.

En este sentido, además de los múltiples compromisos postergados, fue la problemática en torno al agua la que se constituyó en el elemento movilizador, en tanto “elemento vital”, despertando la indignación generalizada de la población, sobretudo indígena: “...nos han quitado nuestras tierras ahora nos quieren quitar el agua, que es la sangre de la pachamama..” (Comunario aymara en Pulso, abril 2000).

El desconocimiento del Estado sobre el valor del agua como “bien común”, administrado por diferentes colectividades socioculturales, despertó y evidenció las múltiples contradicciones de un país donde “la construcción del nosotros”, del sentimiento de pertenencia a una nación proyectada desde la Revolución Nacionalista parecía haber fracasado haciendo explícito el abigarramiento de la sociedad Boliviana, la coexistencia desarticulada de los diferentes tipos civilizatorios (Tapia 2002b) subordinados por una élite criollo-mestiza que “en tiempos modernos” reproduce “colonialmente” las relaciones sociales en tiempos actuales” (Prada²⁹).

Manifestación de contradicciones y reafirmación de identidades

La trascendencia de las protestas indias de abril y septiembre reside en la reafirmación de las múltiples dimensiones de identidad del “sujeto indio”: su condición étnico-cultural, como naciones oprimidas y excluidas; su condición de clase, como sujetos explotados y su condición de “raza”, como sujeto discriminado, que atraviesa las otras dos condiciones del sujeto subordinado. Pero esta reafirmación tiene un componente fundamental la ruptura de la alianza y la relación patrimonial entre el indio y el q'ara.

En los últimos 50 años, la construcción de la identidad colectiva del sujeto indio tenía como principal referente histórico “la memoria histórica corta” (Rivera, 1984), que hace referencia la relación indio-Estado establecida a partir del proceso revolucionario de 1952. Esta relación marca las intenciones del indio de ser integrado al Estado-Nación renunciado a “sus aspiraciones comunitarias autodeterministas por la que históricamente habían luchado” (Patzí, 1999: 234); y los intentos del Estado de convertirlo en un agente del mercado convirtiéndolo en un productor agrícola parcelero y en la masa electora que legitima y sustenta el poder de la élite que controla el aparato estatal.

Sin embargo, las luchas indias del 2000 expresan la culminación de ésta “memoria histórica corta” y la recuperación de la “memoria histórica larga”, el indio como nación y raza, que se había ido gestando desde la década de los setenta con el surgimiento del Katarismo indianista, tras la constatación de que la sola “campesinización” no había logrado superar las relaciones sociales basadas en el colonialismo interno, como formas de sociabilidad que reproducen su condición de subordinación societal,

sino lo había desproporcionado de recursos para modificar su condición de vida y acceder al poder exclusivos de los herederos coloniales.

En este proceso de conflictividad social se recurre a la “historia de larga duración”, a las derrotas y triunfos del indio como el cerco de Tupak Katari de 1879, para denunciar las contradicciones societales y reforzar el imaginario colectivo que va recuperado, incluso, los mitos de liberación que se expresan en las declaraciones de la dirigencia sindical y las bases movilizadas:

“... estas movilizaciones nos están diciendo que ya la tierra se está moviendo y por debajo todos los miembros descuartizado de Tupak Katari se están moviendo y poco a poco se van a unir, cuando se van a unir quiere decir que ya ha llegado nuestro tiempo, y que el tiempo de los q’aras ya esta llegando a su fin, por eso decimos que ya estamos en tiempo de Pachakuti, de la revuelta, por eso hay tantos conflictos y todas las comunidades se movilizan como el 2000” (M. Llampa)

Con la recuperación de la memoria histórica larga que reafirma la identidad india se constata la ruptura definitiva del “pacto de reciprocidad”, de “agradecimiento”, de “compromiso” entre los indios que se habían favorecido de la Reforma Agraria y la élite política expresada en los partidos políticos tradicionales. Es la ruptura del pacto patrimonialista que había legitimado en el campesino/indio su situación de subordinación como un sacrificio por el “pacto social” para construir el “nosotros”, pero excluyente para los indios.

Esta ruptura es el resultado del desvanecimiento del Nacionalismo Revolucionario que deja de tener sentido en el proceso neoliberal actual que acentúa las contradicciones no sólo de clase sino de nación y raza, a partir de la negación del indio en los intentos frustrados de “blanquearlos”. A su vez, estas contradicciones despiertan las demandas de autodeterminación en las “masas” y en los nuevos líderes campesinos/indios que cuentan con “capitales culturales escolares”³⁰, como menciona García L. recordando a Bourdeau, que les permite mejores posibilidades de articular demandas para unificar criterios colectivos y recuperan su capacidad interpeladora al Estado y a la élite que lo gobierna.

Lo anterior hace explícita la escisión entre sociedades implícitamente confrontadas cuyas practicas sociales y políticas, como menciona Barrera (2002), se oponen dentro de un campo social y cultural compartido, el Estado Boliviano, al que hace referencia F. Quispe:

“El gran logro es haber hecho tomar la conciencia que en el país existe esas dos Bolivias, la opresora q’ara y la oprimida india (...). Hasta el 2000 el indio siempre andaba agachado, nadie quería ser Quispe, nadie quería ser Mamani (...) desde ese día hemos tenido una recuperación del orgullo indio...”(F. Quispe).

Esta recuperación del “orgullo indio”, la constatación de las Bolivias escindidas permiten recobrar el sentido de las luchas pasadas por la autodeterminación que no implica posiciones “separatistas” o “divisionistas”, sino la reubicación del indio en la estructura social boliviana, la superación de su condición de desigual por su

condición de diferente, la superación de su situación de subordinación societal por una real participación en la construcción de un proyecto colectivo de Nación desde sus sistemas normativos, de gobernancia y territorio que, de la clandestinidad, han pasado a ser medianamente reconocidos por el Estado de derecho vigente, en tanto “usos y costumbres”. Así, se reproduce aunque de manera transformada las diferentes formaciones societales³¹.

Por otra parte, las luchas indias hacen explícita la contradicción en torno a la condición racial del sujeto indio, como una dimensión identitarias reforzada políticamente, principalmente, por los aymaras del altiplano paceño para quienes, en su condición de migrantes a centros urbanos, la estigmatización racial se va reproduciendo de manera implícita en las relaciones sociales contemporáneas. Un estudio realizado en 1986 muestra esta situación que 17 años después no logra ser superada:

“Existen espacios en el complejo mundo social de la ciudad donde los residentes aymaras no pueden ingresar; no se prohíbe explícitamente, no existen letreros que señalan la exclusión, pero la distancia social y cultural está determinada por el límite de una ‘concertación’, donde la fuerza de los que discriminan se impone sobre los residentes aymaras. Las humillaciones y frustraciones permanentes son llagas vivas en los migrantes aymaras” (Sandoval en León, 1990:147)

Este límite “concertado” que determina la distancia social y cultural entre sujetos cultural y racialmente diferenciados un Estado formalmente monocultural, resalta en esta nueva fase de luchas indias. Pues mientras los actores movilizados (quechuas, en menor medida, y, fundamentalmente, aymaras), refuerzan su identidad india como cultura y raza, las élites políticas estigmatizan el accionar del indio movilizado y “criminalizan la protesta” (Taddei: 2003). Por ejemplo, para la élite blancóide el linchamiento de un militar en la localidad de Achacachi y la desaparición de efectivos militares en la región del Chapare, constató “la brutalidad, la “crueldad” con la que actúan los “indios” en momentos de conflicto y los califican de “criminales” y “subversivos” a quienes se les debe aplicar el “rigor” de la Ley. Mientras para los actores movilizados la represión además de desconocer sus derechos invalida su condición humana:

“... qué somos nosotros, acaso somos animales, acaso no tenemos derechos, acaso no somos personas, para que nos maten así estos q’aras del gobierno?. Aquí la pobreza es grande pero cuando planteamos nuestras reivindicaciones, nos tratan de subversivos. Lo que pasa es que el gobierno no conoce la realidad. Nos dicen que es cosa política, claro que sí, tenemos derecho a la política o el gobierno nomás puede hablar de eso. Tenemos nuestro pensamiento eso es delito?”³²

De ello, los indígenas y sus líderes cuestionan nociones como democracia representativa, modernidad y globalización, que los plantean como insustanciales y carentes de sentido en tanto inhibidoras de lo indio, de sus prácticas, sus derechos y sus procesos de autogobierno, y, en tanto permiten la discriminación a lo indio. Por eso tras las movilizaciones, está el rechazo al capitalismo salvaje, que invade tierras comunales y hace caso omiso de las leyes vigentes, a la privatización del agua, a la lógica urbana de despilfarro en desmedro de las necesidades productivas del campo,

la protesta frente a la erradicación de valiosos recursos y el rechazo a las políticas estatales de lucha “antipobreza” (Rivera en Pulso, septiembre 2000).

Con lo anterior se incorpora otro elemento de la lucha india, lo “antiimperialista”, que refuerza la identidad colectiva de lo indio pero de un “indio más nacionalizado”, como es el caso de los productores de coca cuya lucha sectorial se convierte en una lucha más nacionalista en tanto se cuestiona el rol del Estado y la intromisión externa que exige, impulsa y financia las políticas de erradicación de coca, como una nueva forma de colonialismo que vulnera la “dignidad y soberanía nacional”.

Con estos elementos que van tomando cuerpo y sentido en las diferentes movilizaciones se reafirma y reclama su condición de sujetos políticos, pues los campesinos/indios se dan cuenta de sus capacidades no sólo de organización sino de aglutinar fuerzas, de interpelar al Estado y a la élite q’ara, a partir del reconocimiento de su rol económico para la sociedad Boliviana:

“... cuando hemos hecho el bloqueo económico hemos mostrado a los ciudadanos (...) que los indios producimos, que generamos divisas, esto no significa que estamos en contra de los pobres de la ciudad porque también peleamos por ellos, porque son nuestros hermanos” (F. Quispe).

El “bloqueo económico”, el desabastecimiento y la incertidumbre que vulneraba la economía y la sobrevivencia del ciudadano, del empresariado boliviano, permitió también reafirmar la identidad del indio como sujeto económico, en el proceso de producción de alimentos. Pues, esta estrategia de acción política evidencia la dependencia del mercado interno a la economía campesina como consecuencia, a decir de León (1990), de la no participación del sujeto indio desde su condición de ciudadanía en la construcción del mercado interno; por tanto, este último está determinado por las estrategias económicas desarrolladas desde las comunidades indígena/campesinas.

Esta reafirmación de la identidad india, como sujeto económico y político, además de constatar la ruptura patrimonial, permite recuperar el rol protagónico de las bases campesinas/indias para superar su situación de “pongos” de los partidos tradicionales como de la propia dirigencia que, bajo la lógica caudillista, ha intentado manejar a las bases en beneficio de sus liderazgos omitiendo que éstas constituyen la fuerza del movimiento y no al revés. Es decir, la reconstrucción de la identidad colectiva permite a las bases tomar el control de la movilización y a los líderes actuar en función a ese control (Prada 2002:98). Por tanto, cualquier pretensión de movilizar por fines caudillistas tiende a fracasar si estos fines no se articulan con los intereses de las bases campesinas/indias.

Sin embargo, pese a las múltiples contradicciones y la contundencia de la protesta india los acuerdos establecidos con el gobierno de turno, como una “victoria social”, no lograron materializarse. Muy pocos se cumplieron, sólo aquellos que no implican grandes inversiones para el gobierno (indemnización para heridos y fallecidos, tractores). En cambio, las demandas que implican una modificación del orden socio-político, como la erogación y revisión de varias disposiciones normativas que ponen

en discusión políticas estatales (Ley 1008, D.S. 21060, Ley de Hidrocarburos, Ley Forestal entre otros) fueron aceptadas pero no efectivizadas.

El hecho de que no se haya avanzado en el cumplimiento de los acuerdos tiene que ver con lo que Laserna denomina “la lógica de la negociación forzada” que implica la concertación por la culminación de un enfrentamiento que hace explícito los poderes relativos de las partes (Laserna, 2002: 8). Por un lado, un gobierno con un “vacío de poder” pero que aún contaba con el control del aparato estatal; por otro, un movimiento social que había logrado reavivar el poder de las bases, pero cuyas protestas constituían en movilizaciones aún circunscritas a una “... guerra parcial (...), pero que no derivan en una guerra total contra el Estado, el aparato de dominación nacional” (Prada, 2002:84).

Bajo esta lógica los logros no se hicieron eficaces y los compromisos quedaron “congelados”, para un futuro estallido social, evolutivamente mucho más violento. La única excepción fue el caso del Agua que, como dijimos, al ser este un bien común “escaso” y de difícil acceso, se convirtió en el recurso movilizador que despertó sentimientos dormidos pero latentes de subordinación, dominación y explotación.

La escisión entre la trascendencia de las protestas y la escasa materialización de las demandas tiene que ver con la reproducción de la cultura política de la confrontación al interior del movimiento, por problemas irresueltos, como las disputas por consolidar lideratos y controlar los instrumentos orgánicos, corporativas o políticos del movimiento.

Lideratos y alianzas durante las luchas indias

Si bien es importante la lectura sobre la magnitud de las protestas indias, es también importante mostrar que éstos levantamientos no fueron el resultado de una decisión consensuada y homogénea del movimiento, sino que se dieron en un margen de disputas internas profundas, “... de dramáticas contradicciones inherentes al movimiento social” (Prada, 2002: 84). En este sentido, los conflictos y los logros alcanzados definieron los posicionamientos de los líderes, sus alianzas y sus escenarios de influencia que se reflejarán posteriormente en las elecciones nacionales del 2002.

Con la elección de ex líder de la Ofensiva Roja Tupikataristas, Felipe Quispe, a la cabeza de la CSUTCB se inicia un proceso de recuperación de los elementos de lucha étnico-culturales pero no lo pluri-multi, que el Gobierno de Sánchez de Lozada había logrado articular perfectamente a los cambios normativos, en 1994, sino que enfatizó la reivindicación política del sujeto indio como nación retomando el argumento “como indios nos explotan como indios nos liberaremos” (Quispe en Albó, 2002: 80).

Con lo anterior, se introduce nuevamente una corriente indianista en el seno de la CSUTCB, a partir de la cual se va articulando el nuevo liderato indio entorno a la

experiencia política de “el Mallku”, y paradójicamente a lo esperado surgen nuevas disputas en el aparato orgánico del movimiento indio, que con mucha dificultad había logrado entrar en consenso en 1995. Así, surgen dos frentes encontrados que se visibilizaban en los escenarios geográficos donde se sucedían las movilizaciones indias.

En algunas regiones aymaras del altiplano paceño, el discurso de F. Quispe empieza a reavivar el pensamiento indianista de Fausto Reinaga³³ que identifica las frustraciones del hombre aymara haciendo visible la desigualdad étnica, lo que hizo sostenibles las movilizaciones y generó posiciones incluso radicales:

“Bolivia no es ninguna solución para nuestros problemas, su gobierno en vez de escuchar nuestras demandas nos gasifica sin compasión en las calles y en las carreteras y ahora ha sacado todo su aparato bélico para arremeternos o matarnos” (Comunicado emitido en Julio del 2000 por los Amautas y Mallkus de Omasuyos.)

Por otro lado, en la región del trópico y los valles de Cochabamba, los cocaleros y campesinos quechuas a la cabeza de Evo Morales, enarbolan también esta condición de desigualdad pero con un énfasis en la desigualdad económica más que étnica, aunque con un discurso de tipo étnico, marcada por la presión de las políticas de erradicación y la intromisión cada vez más evidente de la Embajada Norteamericana. Situación que ha impulsado a este sector a buscar alianzas y desplazar su movilización del campo a las ciudades.

En estos escenarios los intereses de los líderes, de reafirmar sus liderazgos dentro del movimiento y amplían su escenario de influencia, se encuentran con la necesidad de las bases campesinas/indias de tener respuestas inmediatas a sus demandas cotidianas. F. Quispe consiguió alianzas intersectoriales con el sector del magisterio rural, los gremialistas y los transportistas paceños, todos ellos aymaras pero con demandas específicas. E. Morales, logró consolidar sus alianzas con la Coordinadora del Agua, conformada por la Federación de Regantes, los Fabriles, la Central Obrera Departamental, los Universitarios y el Magisterio (sectores sociales en su mayoría “quechuas amestizados”), alianza que el 2001 se concreta con la formación de la Coordinadora de Movilizaciones Única Nacional (COMUNAL).

Estas alianzas y pugnas internas evidencian dos elementos de la acción política india. Por un lado, la necesidad de acciones colectivas intersectoriales como formas de presión de mayor envergadura hacia los gobernantes, demostrando la capacidad movilizadora y de construir poder desde las bases, aunque aún no se ha resuelto el tema de la negociación conjunta, pues si bien se mostró la vulnerabilidad política de la élite y la “victoria política” del indio -que hizo evidente una nueva correlación de fuerzas, las élites adineradas y los indios empobrecidos- los acuerdos intersectoriales no se consolidaron al momento de la negociación.

Por otro lado, las estrategias y escenarios de movilización resultan ser actos calculados por quienes constituyen los lideratos y las bases de las organizaciones campesinas/indias. La sustitución de las marchas y huelgas de hambre por los

bloqueos de caminos; las formas de organizar las movilizaciones, de convocar al campesinado en general a identificar a los sectores de mayor resistencia y hasta ubicar estratégicamente a las regiones del campesinado más combativo son producto del cálculo político sindical:

“La movilización lo planificamos desde que entre a la CSUTCB en 1999, algunos decían hay que hacer marcha, hay que hacer huelga de hambre, yo no estoy de acuerdo porque eso no hace nada al gobierno, yo decía que hay que hacer el bloqueo económico, o sea el bloqueo de caminos (...), para eso que se requiere un plan y yo tenía un plan: primero viajar a las comunidades, estar en las comunidades, dar cursos, charlas preparar todo con los secretarios generales trabajar en los lugares donde hay más gente, ahí nos preguntamos: ¿qué provincias históricamente se han levantado con Tupaj Katari?, ¿históricamente que lugares han acompañado a Zarate Willka? (...) ahí yo he hecho el trabajo ...” (F. Quipe) .

Por tanto, los escenarios geográficos donde se genera mayor resistencia en las luchas indias del 2000 no estaban relacionados con la situación de extrema pobreza de sus poblaciones, sino más bien con condiciones históricas e identitarias que condicionan la capacidad movilizadora de la población. Este fue el caso de las poblaciones aymaras del Departamento de la Paz (Omasuyos, Larecaja, Los andes, etc.) y el caso del Trópico de Cochabamba, donde si bien constituyen poblaciones pobres (94% y 64%, respectivamente), a diferencia de otras zonas, cuentan con mayor acceso al mercado nacional e incluso internacional.

Así, la territorialidad de la protesta estaba relacionada con el enraizamiento de las contradicciones indio-sociedad “q'ara” o indio-Estado. El primer caso se da en las poblaciones aymaras donde la discriminación racial, que se reproduce en su relación con la población blancóide-mestiza, ha permitido reafirmar su identidad colectiva como nación (aymara) y como raza (el indio) y denotar su condición de poblaciones combativas y de resistencia social, que tienen reavivada la memoria histórica de sus luchas emancipatorias³⁴. Mientras que en el Chapare la contradicción indio-Estado se profundiza por los más de 15 años de resistencia a las políticas de erradicación de coca permitiendo reafirmar su identidad política.

Por su parte, las alianzas intersectoriales también responden a un acto racional-estratégico de la acción política india. La CSUTCB a la cabeza de F. Quispe consolidaba su alianza con el sector de magisterio rural, transportistas y gremialistas, sectores claves considerando no sólo el elemento identitario (todos aymaras, todos indios), sino también su experiencia movilizadora (magisterio), la proporcionalidad de sus bases (gremialistas solo en sede de gobierno sobrepasan las 45.000 personas) y el poder económico (los transportistas), para proyectar resistencia en las movilizaciones.

La Coordinadora de las federaciones del trópico de Cochabamba, liderizada por E. Morales, decide apoyar a la otra ala del conflicto: “la guerra del agua” en Cochabamba liderizada por los regantes y la “Coordinadora del Agua”. Los cocaleros se articulan a la movilización no desde sus demandas sectoriales (el tema de la erradicación de la coca) o identificados con la problemática del agua, como

pasó en el altiplano paceño o en la zona de los valles de Cochabamba, sino como el resultado de este ejercicio de medir fuerzas para fortalecer sus acciones políticas como sector, que hasta entonces se habían caracterizado por la “soledad social” de sus luchas.³⁵

“... el dirigente de los regantes nos pidió que apoyáramos en el tema del agua, nosotros en un ampliado preguntamos a las bases si vamos o no vamos y en dos reuniones dijeron que no, ‘¿acaso ellos nos apoyan?’, después (...) volvimos a convocar a las bases y los compañeros dijeron que es importante apoyar ganarse la confianza de los regantes de Cochabamba, en ese sentido, en un ampliado de las 6 federaciones decidimos de manera orgánica apoyar a esa movilización en contra del agua y salimos, (...). Así ganamos la confianza del pueblo (...), desde ahí hay confianza desde Cochabamba”. (L. Cutipa)

Así, ambos líderes indios amplían sus ámbitos de influencia y sus alianzas e incorporan en la acción colectiva la lógica andina del Ayni³⁶, como actos de reciprocidad, de dar y recibir apoyo de los sectores movilizados. Pero, estas alianzas no fueron resultado de intereses compartidos, “de la articulación de estructuras organizativas que resulten en unidad”, sino de “coincidencias dinámicas”, de la “simultaneidad de rebeliones” (Prada, 2002:84), pero sobretodo de las oportunidades políticas, de un cálculo de costo y beneficio para los líderes y el movimiento mismo³⁷ que les permitió superar su “soledad social”, sus luchas localistas hacia una ampliación de la “territorialidad” del movimiento³⁸, aunque tienen irresuelto la consolidación de una alianza de fuerzas sociales que “articule a las clases subalternas de la ciudad con la estratificación social insurgente en el campo” (Ibid: 100).

La dinámica conflictiva de las organizaciones campesinas/indias

La configuración del escenario de la protesta, la región del Altiplano paceño con fuerte influencia del líder aymara F. Quispe, por un lado y por el otro, la región del Trópico y parte de los Valles de Cochabamba con el liderato indiscutible de E. Morales, contrariamente a permitir una articulación al interior del movimiento y de sus sistemas de representación social, evidenciaron las diferencias y contradicciones en su interior.

Como ya se mencionó, desde mediados de los 80 la CSUTCB matriz sindical del campesinado a nivel nacional y principal motor del movimiento campesino/indio, había entrado en una profunda crisis interna, por el caudillismo muy arraigado en su seno. Los intentos de superación de la crisis se dieron con la convocatoria en 1995 a todas las corrientes de la CSUTCB y a otras instancias de representación a nivel nacional, para la conformación de un Instrumento Político. Dos años después aparecían nuevamente dos lideratos confrontados: Evo Morales, con apoyo pleno de los cocaleros y ampliaba su campo de influencia en otros sectores del campesinado no cocalero, y Alejo Veliz, que arrastraba principalmente a los quechuas de Cochabamba. En este periodo los aymaras habían perdido liderato después de la salida de los kataristas, del aparato sindical.

Pero es la profundización de la escisión orgánica de la Federación Departamental de Campesinos de Cochabamba que profundiza la división orgánica a nivel nacional.

Las disputas por la hegemonía y liderazgo del instrumento político³⁹ protagonizada por los mandos intermedios -Alberto Zapata, vinculado al liderato de Alejo Veliz y su instrumento político ASP, posteriormente se integra a las filas del liderato de F. Quispe; y Román Loayza vinculado al IPSP de Evo Morales-, se agudizó el 2000 durante la convocatoria al Congreso Departamental para renovar la directiva sindical, en manos de Zapata. Los intentos de las dirigencias provinciales de superar la crisis orgánica recae en la elección de una dirección imparcial, que posteriormente se vincula con la corriente de Evo Morales. Así, se logra el liderato de E. Morales en casi todo el departamento de Cochabamba, lo que se ve claramente definido durante las luchas sociales de Abril y Septiembre del 2000 y la marcha COMUNAL del 2001, como en el triunfo electoral que le ubica como la primera fuerza político-partidaria a nivel departamental.

Esta disputa por la hegemonía del movimiento y por el control del instrumento político que habían creado (ASP) tuvo su resonancia en el IX Congreso Nacional de la CSUTCB el 2001, que acabó en enfrentamientos violentos y en una profundización de la división al interior de la CSUTCB. Los simpatizantes de E. Morales logran el control de las bases campesinas no sólo en términos sindicales sino político-partidarios, tras la alianza con seis federaciones departamentales. Sin embargo, no logran desplazar el liderazgo de Quispe que se queda con el apoyo del departamento de La Paz y el apoyo parcial de otras dos federaciones, pero además cuenta con el apoyo de la COB y el reconocimiento del Gobierno de turno.

Este “virtual apoyo gubernamental” a la dirigencia de Felipe Quispe significó, para algunos sectores sociales vinculados a los movimientos sociales, una estrategia política para disminuir o frenar la fuerza política que Evo Morales comenzaba a captar en función de los comicios electorales a realizarse el 2002. Sin embargo, con la legitimación de uno y la deslegitimación del otro se trata de restar fuerzas a los dos oponentes políticos que se habían perfilado durante las protestas sociales y habían logrado inestabilizar a la clase política en el poder y reafirmar la identidad colectiva en torno a lo “indio” y a lo “originario”

Por otra parte, con el reconocimiento gubernamental del liderato de F. Quispe, el haber accedido a demandas de su sector (más de 72) y el vincularlo con partidos de la coalición gobernante, se trata de deslegitimizar su discurso que había inestabilizado no sólo al Estado sino a varios sectores de la sociedad, como el empresariado sobretodo de la región oriental. Se trata de restar fuerzas a posturas que no sólo cuestionan al Estado sino a la sociedad misma, a la forma societal boliviana que subordina cultural y racialmente a las poblaciones originarias, y que plantean discursivamente, aún, la lucha de naciones y razas, por tanto más difíciles de enfrentar y más fácil de generar una polaridad social. Mientras que E. Morales y los productores de coca se constituyen en adversarios pero más fáciles de enfrentar, pues su campo de confrontación es el Estado mismo y no la transformación societal

(por lo menos no lo hacen visible aunque es un tema latente en sus bases) hasta no lograr el poder estatal.

Por tanto, a diferencia de las disputas en 1997–1998 este nuevo desencuentro no sólo se constituye en una expresión de la rivalidad de líderes que intentan controlar la institucionalidad campesina/india, es también el resultado de una confrontación de posicionamientos político-ideológicos que se explicitaron en Abril y Septiembre del 2000:

- Una corriente vinculada aún a las posturas de la vieja izquierda o izquierda “q’ara”, que articula elementos étnico-culturales y plantea como principal adversario de lucha al Estado en tanto entidad antinacional, neoliberalista y en tanto expresión de otro adversario: “el imperialismo norteamericano”. A esta tendencia responden los productores de coca y gran parte del campesinado de los departamentos de Cochabamba, Potosí y Chuquisaca.
- Una corriente indianista que identifica al Estado como su adversario, también lo califica como neoliberal y “neocolonial”. A diferencia de la anterior identifica un Estado q’ara que reproduce las relaciones coloniales y de subordinación de las formaciones societales indias. A esta se aglutinan gran parte de los aymaras del departamento de La Paz.
- Y una tercera vertiente, que no necesariamente ve al Estado como un adversario a vencer, más bien busca consensos. Esta corriente no está estrechamente vinculada a la organización sindical campesina y esta conformada en su mayoría por los pueblos indígenas de las tierras bajas del país, que en su mayoría optaron por el “reconocimiento” “reconociendo” la institucionalidad del Estado.

DEL MOVIMIENTO REIVINDICATIVO A LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Las revueltas indias de 2000 constatan que las acciones colectivas indias constituyen en movimientos sociopolíticos que, desde diferentes posturas, están pugnando por transformar las relaciones de poder, el orden social y político de la sociedad boliviana, con propuestas contradictorias y, a su vez, complementarias, sobretodo para quienes intentan superar la exclusión, no solo sociocultural, sino política. Por ejemplo, el hecho de cuestionar e impugnar el proceso eleccionario como mecanismo que constata las relaciones de dominación y consolida el poder en manos de la élite y, al mismo tiempo, participar en dicho proceso, evidencia la profunda necesidad de participación política de estas poblaciones.

La emergencia de partidos indios y el desprendimiento del dominio de la Izquierda q’ara

En 1995, tras la concertación de diferentes sectores sociales indios (CSUTCB, Federación Nacional de Mujeres campesinas Bartolina Sisa, Federación de Productores de Coca, Confederación de Colonizadores) para consolidar un partido

político propio: La Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP), se inicia una nueva fase de la participación política del campesinado en Bolivia. Se inicia también, el desprendimiento del dominio y control que habían tenido los partidos tradicionales, incluidos los de la izquierda, sobre la dirigencia sindical y las bases campesinas, para consolidar su hegemonía sobre la acción política del indio, como la única heredera de “hacer política”, que renuevan y refrescan sus enfoques teóricos a través del discurso indígena para reproducir su horizonte colonial (Rivera, 1993:51)

La formación del ASP en 1995, como proyecto político-partidario indio, expresa la necesidad de los campesinos/indios de consolidar su autonomía política, respecto al dominio de los partidos políticos en manos de la élite que, a partir de esta dependencia, reproduce su situación privilegiada en las relaciones de poder y subordinando política y económicamente al indio.

“ el 52 con la revolución agraria nos deshacemos de los patronos, el 52 aparecen otros patronos, los partidos políticos (...), por eso que siempre hemos pensado en fundar nuestro propio partido político para dejar de ser pongos, para que ya los partidos políticos no nos compren nuestras conciencias” (J. Rivas)

Sin embargo, tras las disputas internas por lograr la hegemonía de las instancias organizacionales como del instrumento político, surgen nuevas expresiones político partidarias de lo Indio: el Movimiento al Socialismo – Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS- IPSP) en 1997 y el Movimiento Indígena Pachacuti (MIP) el 2000.

El MAS surge de la escisión del ASP, y recupera a gran parte de los sectores que le dieron origen. En términos político ideológicos, recurre a la corriente de izquierda a partir de la cual interpela a las clases empobrecidas del país, por un lado, y, por otro, a la cosmovisión andina-amazónica como visión étnico-cultural que interpela a los pueblos excluidos de la sociedad boliviana (Zegada, 2002:11), pero ambas son manejadas débilmente y con múltiples contradicciones, como veremos más adelante.

Su posición contestataria frente a las políticas estatales de erradicación de la coca y sobre todo a la ingerencia del gobierno Norteamericano, su postura anti imperialista y anti neoliberal, le permiten un estatus de partido de izquierda. De ahí que, muchos autores la definan como una expresión de la izquierda boliviana no clásica en el sentido doctrinal que a momentos emerge y a momentos sumerge (Ortuño, 2002:33). Una izquierda renovada cuyos líderes ya no son los blancos de clase media y su discurso no incluye la dictadura del proletariado, sino demanda mayor participación y dignidad, para el análisis de A. García⁴⁰, y que representan las desesperanzas y esperanzas de los excluidos y la necesidad de un proyecto histórico de construcción de una sociedad incluyente.

Por su parte, el MIP surge como producto de las revueltas indias de 2000, que recupera a las bases campesinas/indias y a grupos de intelectuales aymaras que habían quedado huérfanos tras la desaparición del escenario político de la corriente katarista y cuya acciones políticas invisibilizadas enfocaban a recuperar el

pensamiento indio y los elementos simbólico/culturales –la recuperación de la wipala⁴¹, el calendario aymara, entre otros-, que permiten la autoafirmación étnica. Así irrumpe nuevamente en el escenario nacional la corriente indianista, que cuestiona el colonialismo interno y la “colonialidad del poder” y plantea la reindianización de las poblaciones denominadas “campesinas”.

El MIP constituye una de las vertientes más radicales del movimiento de la indianidad que intenta recordar al gobierno y a la oligarquía las profundas contradicciones societales. Es un movimiento anticolonialista que rechaza cualquier relación con partidos políticos de derecha e izquierda que reproducen las relaciones coloniales de dominación y que, desde su perspectiva, es el indio el que tiene que recobrar su soberanía política e ideológica.

Sus postulados políticos giran entorno a: recuperar al indio como sujeto histórico y transformador; cuestionar el racismo como el causante de la opresión que ha ido evolucionado con la evolución de los medios de explotación, y la transformación del Estado boliviano para reconstruir las naciones originarias, a partir del “Pachacuti”, la revuelta social que expresa el retorno del poder al indio. Recuperan la tesis de la “lucha de naciones” de la Ofensiva Roja, con una diferencia significativa: desestiman la “revuelta” de tipo foquista y plantean el protagonismo de la “masa” india en la transformación del orden societal.

Tanto el MAS-IPSP como el MIP constituyen la prolongación de un mismo movimiento social y se encuentran en la primera fase de constitución de un partido político. En la etapa de articular los intereses corporativos con la disputa por el control del sistema político por medio de las elecciones, a partir del cual se intenta responder a los intereses de sus bases.

Sus estructuras orgánico-partidarias se basan en las estructuras corporativas que les dieron origen. El MAS ha logrado articular su dirección política bajo la estructura del sindicalismo, de ello que autores como Toranzo (2002) lo categorizan como una instancia corporativa más que un partido político. Mientras el MIP sólo ha logrado la relación entre organización corporativa y partido en las zonas aymara; pues, pese a tener el control de la CSUTCB⁴², le ha sido difícil ampliar su estructura orgánica por su fracaso en la correlación de fuerzas al interior del movimiento, por un lado, y, por otro, porque parte de los integrantes, los aymaras intelectuales urbanizados que no logran traspasar el límite estructural de la sociabilidad q’ara, mantienen débiles vínculos con sus organizaciones sociales (sindicatos o Ayllus).

Para construir sus discursos, sus posiciones e incluso sus proyectos políticos recurren a la Bolivia que no quieren. Es decir, parten de la crítica de la situación actual como la expresión de las contradicciones generadas por una clase, élite o casta blancóide enquistada en el poder para adquirir beneficios individuales o de casta reproduciendo las relaciones de subordinación, exclusión y explotación.

A partir de esta crítica plantean la transformación o refundación del Estado Boliviano. Para la dirigencia política del MAS y los intelectuales que se adhirieron al mismo,

refundar el país implica recuperar la propiedad de los recursos naturales como “dueños originarios” y el control de las empresas antes estatales y ahora privatizadas y en manos de empresas transnacionales, y, a partir de ello, recuperar el rol administrador del Estado retomando los principios y valores de sociedad, de las formaciones societales indias, pero no sus prácticas como alternativas viables para la transformación del Estado Nación.

Aquí hay negación del sentido que los campesinos/indios atribuyen a sus prácticas en tanto estas no sólo reafirman sus identidades colectivas sino su existencia como formación societal, pues estas prácticas culturales, políticas y económicas, a las que les restan importancia en términos de alternativa, son vigentes pese a sus adaptaciones a la economía de mercado. Por lo que, lo étnico cultural, la recuperación de la cosmovisión andina y amazónica que le permiten al MAS su identidad como partido indio y lo identifican con quienes le dieron la posibilidad de acceder a la esfera del poder institucionalizado, no logran traspasar del plano de lo discursivo e incluso retórico.

En cambio el MIP plantea refundar Bolivia recuperando la autonomía de las formaciones societales subordinadas a partir de lo que se denomina la recuperación del Qullasuyana, de la Bolivia India, como identidad, raza y territorio. Implica reconocer que quienes deben administrar el Estado son las mayorías indias, a quienes siempre se les ha negado su rol protagónico en la sociedad. Así plantea no sólo rescatar los principios, sino las prácticas políticas y culturales que refuercen la autogestión y autodeterminación de las naciones. Sin embargo, una cuestión irresuelta es el tema de la pluralidad sociocultural, pues si bien Bolivia es un Estado Nación con mayorías indias, estas mayorías corresponden a diferentes formaciones societales sometidas al poder de la élite blancóide; por tanto no se define, aún, cómo éstas estarán incorporadas en esta refundación de la Nación Qullasuyana, sin reproducir la colonialidad del poder a la inversa.

Por otra parte, ambos cuestionan el sistema político vigente en tanto reproducen el colonialismo interno y el “neocolonialismo”. Para el MAS este sistema perpetúa la desigualdad social y sustenta el “capitalismo salvaje”, pero no cuestiona sus instrumentos políticos (el sistema electoral) que les permitirá llegar al poder, visto como el control del aparato estatal. Así, participar del juego democrático es tener la posibilidad de acceso al poder, de ampliar la acción colectiva hacia el ámbito de la política instituida, hacia el control del aparato estatal para, desde allí, transformar el actual orden socio-político y económico.

Mientras que el MIP cuestiona el sistema político “q’ara” no sólo en tanto legitima la desigualdad social sino en tanto legitima la subordinación de la nación originaria (Qullasuyu) y reproduce la discriminación étnica y de raza. También, cuestionan los instrumentos político democráticos, en tanto son pensados por y para favorecer a la élite que detenta el poder político -control del Estado- y el poder económico. Entonces, conciben el poder como el control de los diferentes elementos de la estructura social: el aparato estatal, el poder económico y el poder simbólico, para la transformación societal.

Sin embargo, una limitación no superada de estos instrumentos políticos reside en que sus discursos y propuestas políticas aún no logran trascender la problemática rural y aún no logran incorporar problemáticas urbanas que interpelen a sectores urbanos -obreros, informales, etc.-, que en su mayoría también forman parte de la indiada, pero cuyas demandas e intereses ya no giran en torno a la problemática rural. Sólo el MAS, como veremos más adelante, ha hecho esfuerzos por romper o acortar este distanciamiento entre lo rural y lo urbano permitiéndole establecer articulaciones coyunturales con sectores urbanos movilizados.

Reconfiguración del escenario sociopolítico: Alianzas y rupturas

Como hemos mencionado, las elecciones del 2002 mostraron resultados *“sui generis”*, si se considera la participación de los partidos indios en los procesos electorales de los 20 años de vida democrática, en la que partidos como el MRTKL y el MITKA no lograron más de 2 escaños; sólo la Asamblea por la Soberanía de los Pueblos (ASP) en su alianza con la Izquierda Unida (IU) había alcanzado 4 diputaciones en las elecciones nacionales de 1997. Todos ellos uninominales y correspondientes a circunscripciones rurales.

Si bien se considera que uno de los factores que modificó la preferencia del electorado fue la acción no calculada de los partidos tradicionales de expulsar a Evo Morales del Parlamento y las “amenazas” del embajador norteamericano sobre las consecuencias de votar por el MAS, como la reducción de la ayuda norteamericana a un país cuyo presupuesto funciona con el 55% de financiamiento externo⁴³. La modificación de la “geografía electoral” fue mucho más sistémica y menos espontánea, y evidencia las rupturas y re-configuraciones entorno a lo indio, que el MAS y el MIP supieron captar desde sus propias perspectivas.

La ruptura de la alianza “indios”- “élite nacionalista” y el poder del indio

Una de las rupturas que se concreta en las elecciones 2002 tiene que ver con la alianza de reciprocidad implícita que existía entre los indios “campesinados” y la élite política, expresión del nacionalismo revolucionario. Alianza que se había mantenido en las bases, principalmente de aquellos campesinos/indios que fueron protagonistas de la revolución del 52 y favorecidos por la eliminación del pongueaje, la dotación de tierras, el derecho al voto y a la educación. Dichos favores fueron devueltos a través del voto. Si bien desde fines de los 70 con la autonomía lograda por la CSUTCB el porcentaje de voto campesino a favor del MNR fue disminuyendo, seguía siendo representativo para mantenerlo como hegemonía política.

Al porcentaje de votos que reafirmaba este “pacto de reciprocidad” se sumaba la desconfianza de los campesinos/indios electores sobre la participación de líderes indios en el sistema político, en tanto desconfiaban de sus capacidades para competir con los que siempre habían controlado el poder, la élite política, Así, optar

por “no desperdiciar su voto” era una práctica política que contribuía a la relación patrimonial entre indios y élites políticas:

“... antes la gente prefería votar por los partidos tradicionales como el MNR y el MIR (...), cuando ven a un indígena a la cabeza de un partido dice ‘cómo ese nos va a gobernar es un t’ara (tonto o ignorante), yo tengo que apoyar a un partido más o menos... pero entonces no se daba cuenta que se estaba rechazando a sí mismo” (T. Durán)

Algunos estudios sobre participación democrática del campesino muestran su actitud reacia a dar un voto meramente “simbólico” y prefería votar para alguien con posibilidades reales de ganar (Albó, et al, 1995: 172), los “no indios”. Este fue el caso de los partidos indios desde 1978, a quienes les fue difícil obtener la votación de su sector, como paso con el MRTKL que obtuvo escasa votación en las elecciones de 1989, mientras que en 1993 su participación con el MNR le significó más votos, sobre todo en el departamento de La Paz.

Sin embargo, para las nuevas generaciones campesinas/indias la reforma agraria significó un mayor empobrecimiento de sus condiciones de vida y la expulsión de sus zonas de origen hacia regiones rurales desconocidas (caso trópico cochabambino y yungas paceños) o centros urbanos donde se profundiza y hace explícita la discriminación de su condición étnica. Estas frustraciones fueron muy bien manejadas políticamente por las nuevas dirigencias, con capacidades y habilidades producto de una de las aperturas que la misma revolución forjó, el acceso a la educación, para consolidar una oposición social hacia partidos políticos tradicionales (MNR, ADN, MIR, principalmente) afines al modelo neoliberal que profundiza la subordinación societal.

A lo anterior se suma que los “indios” habían comenzado a confiar en sí mismo, en su capacidad de control y administración de los espacios de poder local, antes exclusivo para los hijos de los ex hacendados. Uno de los cambios normativos que permitió recuperar esta capacidad de control de los espacios locales fue y es la Ley de Participación Popular, nacida en 1994. Así, desde 1995 los diferentes sectores de la indianidad constataron la utilidad de la mencionada norma cuando tomaron el control de los gobiernos locales participando en proceso electorarios municipales ya sea a través de su instrumento político, la ASP – en el caso de las poblaciones cocaleras y quechuas de Cochabamba- o de partidos políticos tradicionales de izquierda o derecha – caso indígenas de tierras bajas y quechuas de Norte de Potosí y Chuquisaca-

Pese a las dificultades que implica manejar una institucionalidad que desconocen, esta experiencia permitió reforzar la idea y necesidad de *quiebre* con los partidos tradicionales y de su situación de “pongueaje político”. En 1999 el control campesino/indígena de los espacios municipales será numéricamente mayor con respecto a 1995, ganaron en 47 de los 311 municipios existentes en el país, con la sigla del MAS⁴⁴.

Las luchas indias que acompañan el comienzo del nuevo milenio constatan que los

partidos tradicionales ya no contaban con los elementos que mantenían el control electoral de los indios tras la búsqueda de su inclusión ciudadana, como el acceso a servicios ahora privatizados o el acceso a los recursos naturales, ahora convertidos en mercancía controlada por empresas privadas. Por tanto, habían desgastado la debilitada “alianza simbólica” que llegó a su culminación en las elecciones nacionales del 2002.

Para autores como Prada y García L. el ciclo neoliberal, abierto por el partido del MNR que se caracterizó por traicionar la revolución del 52, su expresión discursiva, su secuela política en el plano de las representaciones se cerró y entró a su desmoronamiento con las movilizaciones del 2000 (Prada 2002:136), provocando el declive de la receptividad simbólica de las clases subalternas a los flujos discursivos emitidos por las élites económicas y políticas anteriormente unificadas en torno a partidos políticos como el MNR, MIR, ADN y dando lugar a la multiplicación de las fuentes de emisión de nuevas creencias políticas (MAS, MIP y los movimientos sociales) (García L., 2002: 161-162).

Ante este panorama, los partidos políticos tradicionales establecieron alianzas coyunturales con algunos sectores y líderes campesinos/indios. Por ejemplo, el MNR aplicando el “marketing electoral” que le resultó favorable en 1993 buscó alianzas con fragmentos de partidos indigenistas e indianistas, como parte el Partido Indio fundado por el Indianista Fausto Reinaga y manteniendo su alianza con parte del MRTKL. El MIR buscó aliados en dirigentes campesinos y indígenas de “alto nivel”, ex ejecutivos de la CSUTCB y de la CIDOB⁴⁵. La NFR⁴⁶ estableció alianzas con el ASP de Alejo Veliz -llevándolo a éste al suicidio político sindical- o líderes que en otras ocasiones recibieron gran apoyo de sus bases. Sin embargo, ninguno de éstos logró convencer a los campesinos/indios y sucedió lo que éstos recurriendo a la cosmovisión andina enunciaron: recibieron “el castigo de la coca”.

Los resultados electorales del 2002, por tanto, muestran dos elementos centrales, una consecuencia de la otra: 1 que el discurso neoliberal sustentado por las élites, quienes 50 años atrás promulgaban el nacionalismo, se encuentra en proceso de desmoronamiento, consecuentemente, 2) se concreta la ruptura del “pacto social”, que ligaba al indio con la élite política, por una construcción de Nación incluyente del indio que deja de tener sentido con la implementación del neoliberalismo que niega al indio, niega su cultura y niega la posibilidad de desarrollo social desde su diferencia.

Así, la mayoría de las circunscripciones donde los partidos indios tuvieron mayor votación están conformadas por poblaciones rurales favorecidas con la dotación de tierras (1953) o con el acceso a los espacios de poder local (1995). Este es el caso cochabambino, donde, del total de 10 circunscripciones electorales, 7 favorecieron al MAS, y de éstas sólo una se ubica en el área urbana, aquella que corresponde a población mayoritariamente migrante de zonas rurales andinas, y, muchas de ellas, conectadas con la región cocalera del Chapare. Las poblaciones que corresponden a estas circunscripciones, son poblaciones pobres cuyo porcentaje de pobreza fluctúa entre el 75 al 99,5 %⁴⁷.

En el caso del MIP, a un año de su formación como instrumento político, logró una votación favorable en 5 circunscripciones paceñas que aglutinan a poblaciones de origen aymara. Esta votación constituyó el 36% de la votación en la zona aymara del departamento de la Paz y el 6% de la votación total. Cabe considerar que el MIP no sólo tuvo votación de las comunidades paceñas, sino también de poblaciones aymaras de los departamentos de Oruro y de Potosí. Lo anterior constituye un indicador de la fuerza y el impacto actual del discurso indianista que reavivó la identidad aymara, el “orgullo indio de ser Aymara”, de ser una nación que ha resistido a los embates de la historia no sólo desde el período colonial sino incluso pre-colonial, y que interpela al Estado en tanto Estado opresor de culturas subalternas.

Aquí resaltan dos aspectos: 1) que en una situación de ruptura del pacto social, los “indios” reconocen a través del voto las capacidades políticas de sus líderes de desestabilizar la frágil gobernabilidad y de proyectarse en el campo político exclusivo para las élites políticas y económicas; y, 2) que los resultados electorales muestran la correspondencia entre la capacidad de los liderazgos indios de capturar el apoyo de las bases campesino/indias y la cobertura electoral lograda por cada una de las vertientes políticas indias.

El hecho de que el MAS hubiera ganado en 4 de los 9 departamentos, y el MIP sólo haya alcanzado votación significativa en el departamento de La Paz, tiene que ver también con la victoria sindical de Morales el 2001, que le permitió el control de 6 Federaciones Campesinas departamentales y muchas más provinciales, y el alcance de este control sobre otras instancias organizacionales como la Confederación Nacional de Colonizadores, la Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia - Bartolina Sisa, cuyas últimas gestiones estaban en manos de dos principales líderes cocaleras. Así, las federaciones y sindicatos campesinos se convirtieron en los escenarios de planificación de la campaña electoral de éstos partidos políticos y en espacios que permitían la aprehensión de partido por parte de las bases sociales, con discursos que convierten en propuestas políticas las demandas corporativas.

El Ayni electoral: las alianzas intersectoriales y las demandas articuladoras

Los resultados electorales, además de mostrar que los indios como sujetos políticos habían dejado de “pagar” los favores a la élite criollo-mestiza, expresa la nueva configuración de las luchas sociales que gira en torno a generar bases de articulación de los diferentes frentes sociales en sus intentos de superar los escenarios locales y sectoriales de sus luchas.

El MIP consolidó las alianzas intersectoriales que había logrado la CSUTCB durante la revuelta de septiembre 2000 y las protestas de Julio 2001 (magisterio rural, transportistas, comerciantes), todos a nivel del departamento de La Paz, pero no logró extenderse a otras regiones del país, sobretodo, por su discurso y su propuesta fundamentalista. Ante esta propuesta que ataca al problema neurálgico de las

relaciones sociales bolivianas: el colonialismo interno y reclama la autodeterminación india y la lucha de naciones, muy pocos intentan reconocerse; la mayoría se siente incómodo, lo esquiva o lo minimiza, tanto en el plano de quienes sufren esas relaciones y de quienes las reproducen, una expresión de esto es la siguiente cita:

“... el tema de raza ya es un tema superado y no debe ser un tema de exclusión para algunos sectores, pues muchos aymaras y quechuas están asimilando valores de otra cultura, comparten aspectos” (A. Aguilar)

El hecho de que los diferentes pueblos indígenas u originarios asimilen o interactúen con la cultura occidental, no significa que las relaciones sociales basadas en lo racial estén superadas, más bien implica que éstas se reproducen de manera invisibilizada constituyendo una forma de “violencia encubierta, como afirman Rivera, Albó y Barrios (1993)”, pues esta asimilación no deviene de procesos interculturales, sino de un sometimiento o hasta de una autonegación como una estrategia de superación de la situación de exclusión.

Esta problemática planteada fuertemente por el MIP le restó fuerzas en el campo de la política institucionalizada pero no en la no institucionalizada, donde dicho pensamiento fluye en los pobladores aymaras que tienen despiertos sus “resentimientos” hacia lo q’ara.

En cambio, el MAS retoma el discurso de la existencia de las dos Bolivias, pero no la discusión de la Bolivia “q’ara” y la otra “india”, sino la escisión de la “Bolivia opulenta” y la “empobrecida”, lo que le permitió traspasar las limitaciones que supone poner en discusión en tema racial y más bien retoma un discurso clasista que, combinado con una recuperación de lo étnico en términos culturales, le convierte en un instrumento político “indígena popular”.

Desde el 2000, el MAS intentó construir un discurso más articulador que le permita superar su identidad de partido “cocalero” pues, pese a contar con bases asentadas en gran parte del campesinado afiliado a la CSUTCB, el hecho de que su mayor fuerza social resida en el sector cocalero no contribuyó a esta superación identitaria, a pesar de los esfuerzos de los productores de coca de interpelar a la sociedad boliviana a partir de la defensa de la hoja de coca como una demanda de carácter nacionalista y articuladora de los diferentes sectores sociales, como fue el caso del agua⁴⁸.

Romper la barrera de lo sectorial y convertirse en la expresión del todo implicó, para la principal fuerza social del MAS, apoyar orgánicamente los conflictos regionales como la “Guerra del agua”. Estos “aynis” intersectoriales en las luchas sociales permitió una apertura significativa de su espacio de acción social y política recuperando, así, la necesidad de consolidar acciones intersectoriales que permitan la constitución de una fuerza social contestataria a la hegemonía de la élite política que, sin resistencia social, había logrado privatizar los principales recursos estatales, con apoyo e influencia de instancias externas en las decisiones económicas y políticas del país⁴⁹.

Esta necesidad de articulación en un intento de avanzar de las reivindicaciones sectoriales a reivindicaciones más globales fue perfectamente capitalizada por la dirigencia del MAS, como parte de su propuesta y plataforma política identificando demandas en torno a la posición “anti”: la postura “antiimperialista”, producto de la permanente confrontación de los cocaleros con las políticas intervencionistas de la embajada Norteamérica; la defensa de los recursos naturales y recuperación de los recursos públicos como parte de la lucha “antineoliberal”; y en un tercer plano la recuperación y revalorización de la cultura andina-“amazónica”, no muy relevante en términos de acción pero sí en términos discursivos que le permite legitimidad en las bases campesinas/indias.

El manejo de estos elementos interpeladores a la clase política permiten al MAS afianzar las alianzas y capturar el voto de diferentes sectores sociales como los intelectuales, profesionales, otros sectores indígenas y campesinos e incluso de una parte importante de las clases medias, pese a la desconfianza de los sectores “obrerizados” que, desde su lectura economista, no logran reconocer el rol protagónico del indio en la transformación social. En ese sentido, el MAS logra constituirse no sólo en un partido de indios para indios, sino en un partido liderado por indios con bases indias, pero con propuesta que apelan al imaginario nacional o a la conciencia nacional, lo que le permite una connotación más nacionalista y lo convierte en un partido indio más aceptable que el MIP.

a) La alianza con los profesionales e intelectuales de izquierda.

Los intelectuales de izquierda encuentran en el MAS la plataforma política para recuperar y revitalizar su discurso “anticapitalista” que había sido anulado por el discurso y proyecto de sociedad neoliberal y por el “fracaso” mundial del modelo socialista a fines de los años 80 y el debilitamiento de los movimientos sociales contestatarios como lo fue el movimiento obrero en Bolivia. Muchos de estos intelectuales se refugiaron en pequeños grupos políticos con propuestas tímidas ante la sociedad; otros, recordando los estudios de Rivera (1994), optaron por refugiarse en ONG,s y recuperar el discurso indigenista que les permitía mantener su situación privilegiada de intelectuales y reproducir sus relaciones de diferenciación y de control de lo indio.

Así el MAS-IPSP permitió casar estos dos elementos: recuperar las posturas antineoliberalistas y antiimperialistas y mantener el capital que habían logrado alrededor de lo pluricultural que, además, les permite sustentar su percepción sobre el fracaso o crisis del modelo neoliberal y la necesidad de transformar el Estado que sustenta dicho modelo.

Por otra parte, el surgimiento del MAS-IPSP como movimiento sociopolítico, con pretensiones de articular a los diferentes sectores sociales, permitió a éstos intelectuales pensar en un resurgimiento de la corriente de izquierda. De ahí, algunos intelectuales señalan que el MAS constituye la “izquierda renovada” que, a diferencia

de los años 70' al 90', no ésta ligada a la doctrina 'intocable' sino al pueblo y a sus aspiraciones, (V. Oporto, 2002:33), superando el vacío de comprensión de la realidad indígena, que había tenido la izquierda boliviana por su lectura economista de la problemática indígena. Al menos así lo entiende uno de los actuales diputados izquierdistas del MAS:

“... cuando nos contactamos con los diferentes movimientos (...) como los cultivadores de coca, fui entendiendo la problemática nacional que no solamente tiene carácter económico, sino que tiene un sustrato cultural muy importante sin el cual no es posible definir el futuro de Bolivia, este fue uno de los grandes errores de la izquierda que veía la problemática del país desde el punto de vista económico, entonces este componente tenía que dar una base más sólida a las luchas sociales en este país...” (A. Peredo)

Otro elemento que permite a los intelectuales apostar políticamente por el MAS-IPSP es que sus líderes políticos tuvieron la capacidad y la virtud no sólo de articular a diferentes sectores populares, aunque coyunturalmente, sino también a diferentes grupos de izquierda -Guevaristas, Marxistas, Leninistas, Maoístas, incluso ex-troskistas- que se adhirieron, sobretodo, porque consideran que las luchas emprendidas por quienes conforman este movimiento expresan el resurgimiento de movimientos sociales contestatarios al sistema actual y proponentes de cambios transformadores a nivel nacional como internacional.

Sin embargo, este reconocimiento del rol protagónico del sujeto indio en esta nueva fase de luchas sociales es aún limitado. Pues, al igual que el reducido sector obrero, no logran reconocer su rol de sujetos históricos con capacidades para administrar y transformar las relaciones de poder y dominación. Esta subestimación de los intelectuales hacia quienes supieron formular una fuerza política partidaria y, a momentos, articular a distintos sectores sociales, se ve reflejada en la dinámica interna del instrumento político y en su actuación en el plano de la política institucional reproduciendo “su rol privilegiado de hacer política como herederos q'aras”, como mencionan Rivera (1994), Patzi (1999) y los propios indianistas.

b) El relativo apoyo de la clase media empobrecida

Si bien no se puede calcular el porcentaje de votos que depositaron las clases medias (de la cual la mayoría de los intelectuales forma parte), estas han constituido otro sector importante para redefinir el mapa electoral y dar paso a la indiada a los espacios políticos instituidos.

Este sector social había confiado en ser uno de los beneficiarios de la implementación del modelo económico neoliberal, dando su voto a los partidos tradicionales impulsores del mismo, 15 años después ve que su situación no fue la del ascenso social, sino la degradación de su economía como efecto de dicho proceso. Ni el “capital cultural”acumulo constituye una garantía para no descender económicamente, llevando a muchos de estos a “informalizar” su economía, optar por migrar fuera del país, abaratar el valor monetario de su trabajo o limitar sus lujos para conformarse con una situación austera.

Estudios como los desarrollados por CEDLA⁵⁰ muestran que del total de la población de clase media, el 45 % está llegando al nivel de pobreza, mientras que el 55 % restante se divide en una heterogénea variedad de 'no pobres' que coquetean con la línea de precariedad e inseguridad ciudadana" (CEDLA en La Prensa, mayo de 2003: 11)

El reflejo de su impotencia ante su situación decadente y su rechazo por los partidos tradicionales ha sido su apoyo al MAS. Este apoyo no implicó el reconocimiento de sus capacidades de gobernar, sino como instrumento social de resistencia y de interpelación a las acciones de partidos políticos "corruptos" que, hasta entonces, no tenían una oposición fuerte y sólida que fiscalice y frene las políticas económicas que transgreden su situación económica y su posición de clase. Ante esta situación, los líderes y las bases sociales del MAS habían demostrado que como acción colectiva podían frenar los impulsos neoliberales y reivindicar los derechos de quienes están siendo afectados por el modelo.

Así, las clases medias que votaron por el MAS lo hicieron en tanto confiaron en un rol de fiscalización, en su condición de oposición con fuerte base social, pero no le atribuyen capacidades de manejar el poder estatal, pues pese a su posición más "amestizada" el MAS sigue siendo un partido de indios. De ello, se puede comprender –sin generalizar- las percepciones de "asombro", "miedo", "arrepentimientos" e incluso "pánico" traducido en las manifestaciones de emigrar o en la caída de los depósitos bancarios (Morales en Pulso, 14 de marzo del 2003) ante los resultados electorales, pues nadie había pensado sobre la posibilidad real de que un partido indio podía tener la posibilidad de gobernar el país.

c) Alianza con otros sectores indígenas

Mientras lo antiimperialista y lo antineoliberal, a través de la demanda de recuperación de los recursos públicos, permitió al MAS crear alianzas con sectores sociales no indios, el componente étnico-cultural vinculado a la recuperación de los recursos naturales y la adopción del concepto de territorio, recuperando la demanda de los indígenas de tierras bajas, fue el elemento que permitió articular a diferentes sectores de la indianidad, sobretodo rurales.

Es importante recordar que lo indígena es una heterogeneidad sociocultural que ni la CUSTCB, como instancia corporativa, ha logrado manejar. Pero es en torno a esta idea de "autonomía política" y de apostar por una "victoria política" no sólo en las calles, sino en el escenario de la política institucionalizada, que los diferentes sectores indios confluyen en el instrumento político del MAS, exceptuando gran parte de la población aymara paceña que también son una cultura heterogénea pero que optaron por apoyar y consolidar su propio instrumento político: el MIP.

En torno a esta idea de "autonomía política" se articularon sectores indígenas no vinculados al sindicalismo campesino, como fue el caso de algunos pueblos

indígenas (Chiquitanos y Guarayos) articulados orgánicamente a la Coordinadora de Pueblos Étnicos de Santa Cruz (CPESC). Alianza iniciada en 1999 cuando el MAS-IPSP fue el único partido que había facilitado su sigla -sin exigir afiliación política- a líderes indígenas para postularse a los comicios municipales permitiendo a éstos acceder a instancias municipales, aunque ello no implicó arrebatar el control de los karai (blancos) sobre los espacios locales donde reproducen las relaciones de dominación basadas en la subordinación indígena.

Esta alianza campesino andino - indígena de tierras bajas se fue reforzando con la alianza en términos de acción social que se hizo explícita en las dos últimas marchas indígenas (2000 y 2002), cuando las bases sociales del MAS, los coccaleros de manera indirecta pero los campesinos afiliados a la Federación Campesina de Santa Cruz, participaron activamente de las movilizaciones indígenas.

Por su parte, sectores campesinos/indios como los quechuas de diferentes regiones del país (Norte de Potosí, Sur del país) que habían logrado formar sus propios instrumentos políticos, como el Eje Pachacuti o el Movimiento Originario Popular (MOP), optan por aliarse al MAS como una estrategia de reciprocidad, de dar y recibir; es decir, de postergar intereses específicos para posteriormente recibir beneficios colectivos. Similar fue la alianza con parte de los Ayllus quechuas distantes y dudosos sobre la participación de estos instrumentos políticos indios en las esferas institucionales que se sobreponen a sus sistemas de autoridad tradicional. Por tanto, participar con este instrumento político suponía superar esta sobreposición pues los representantes en el Parlamento estarían sometidos a estos sistemas tradicionales de autoridad.

Si embargo, si articular a la diversidad india sobretodo de la región andina del país es la gran virtud del MAS, le falta avanzar hacia la conquista de otros sectores indígenas que prefirieron optar por reconocerse en los “dones” que el aparato estatal les concede en su condición de indígenas (financiamiento de proyectos, saneamiento gratuito de tierras, etc.). Pues, pese al énfasis que tanto el MAS como el MIP dan a la defensa de los recursos naturales y la recuperación de los territorios indígenas-originarios, aún gran parte de los pueblos de las tierras bajas no se reconocen en el discurso, forzado y retórico, sobre la recuperación de la “cultura amazónica”. Una complejidad que ninguna de las dirigencias de estos instrumentos políticos logra captar y caen en el error de adherirlos a la “cultura andina” como parte de ella, como un intento de homogeneizar la heterogeneidad donde reside la diferencia sociocultural y política de estos pueblos y la que debe ser rescatada.

Por tanto, esta necesidad de “autonomía política”, la ruptura definitiva del pacto social indio- élite, la necesidad de buscar formas de articulación de la acción colectiva, el rescatar y proyectarse recuperando las frustraciones de diferentes sectores sociales y la capacidad de estos instrumentos políticos de manejar estos elementos como oportunidades políticas, permitió a la “indiada” acceder a las esferas de poder que les estaba negado. Pero además, posibilitó una nueva territorialización de la acción colectiva, no sólo como escenario geográfico ampliado, más allá de las acciones localistas, sino como una lógica de desplazamiento dinámico de la acción

colectiva que va del plano de la política no institucionalizadas hacia el acceso y participación en las esferas políticas institucionalizadas, y viceversa, como una estrategia transformadora de este movimiento de sociedad.

LA ACCIÓN POLÍTICA INDIA EN EL PERIODO POST-ELECTORAL

Mientras para la clase política tradicional el acceso de la “indiada” a un espacio político institucional con el 26% de la representación parlamentaria, sin contar con aquellos que prefirieron participar a través de los partidos tradicionales, despertó temores respecto a una real oposición social dentro del Parlamento que podía inestabilizar la débil gobernabilidad de la nueva gestión gubernamental; para los actores políticos excluidos significó una victoria de sus luchas previas expresada en un acceso a los espacios que efectivicen su ciudadanía plena, como un derecho conquistado. Desde esta perspectiva, el escenario de las luchas indias había sufrido un cambio, aperturando otro escenario de confrontación, el Parlamento.

Similares eran las percepciones y reflexiones de los intelectuales que vaticinaban que este logro electoral era, además, una expresión de la reconstitución de los movimientos sociales con una fuerte presencia opositora “antineoliberal” dentro el Congreso Nacional.

Pero ¿qué paso con la acción política de estos actores indios después del hito democrático del 2002 en éstos dos escenarios?, en los no lugares de la política y en los lugares de la política institucionalizada, ¿cómo esta “victoria política” fortaleció sus luchas sociales y su acción política institucionalizada? es lo que trataremos de analizar en este acápite.

El escenario de las luchas sociales

En un contexto postelectoral próximo, el escenario de las luchas sociales, de la movilización y dinámica interna de los sistemas de representación campesino/indio presenta una situación de *contraimiento temporal* de la capacidad movilizadora del movimiento indio, desde sus diferentes sectores (aymaras, productores cocaleros y pueblos indígenas de tierras bajas).

En el 2000 el movimiento social indio había logrado patentar su carácter político nacional mostrando un cambio en la “territorialización” del movimiento -de lo localista a lo nacional, de lo rural a la articulación rural/urbano- a partir de demandas que hacían explícitas las contradicciones y desarticulaciones de la sociedad boliviana. En esta etapa postelectoral la acción colectiva vuelve a contraerse hacia demandas y movilizaciones localistas y sectorialistas pese a los esfuerzos por consolidar la territorialización lograda a principios del milenio. Son varios los factores que inciden en el “contraimiento temporal” de la acción colectiva india.

Pese a los esfuerzos de articular los diferentes sectores campesino/indios se agudiza

la división al interior de los sistemas de representación que hacen al movimiento, principalmente de la CSUTCB y de las Federaciones Campesinas. Esta división se profundiza por la *pugna de liderazgos* indios que corresponde a dos sectores de la indianidad y que además resultan en representantes legalmente reconocidos por el sistema político boliviano, y por la reproducción de contradicciones de la forma de encarar el problema de la participación india en el Estado y el cómo están concibiendo la transformación del mismo y de la Nación.

Esta pugna de liderazgo debilita uno de los logros más importantes que se había visibilizado en las movilizaciones del 2000 y que había permitido caracterizar la especificidad de la nueva etapa de los movimientos sociales en general y del movimiento indio en particular: *La articulación de la dirigencia nacional y las bases campesinas/indias empoderadas*; éstas últimas con capacidad de control y de tomar decisiones sobre las movilizaciones y la negociación de acuerdos.

Al estar dichos lideratos en virtual confrontación de fuerzas, existe la tendencia de revertir la toma de decisiones sobre las acciones de movilización y concertación de acuerdos hacia la "cúpula dirigencial" desplazando a las bases, como sucedió con la convocatoria al bloqueo de caminos en julio del 2001 donde el dirigente máximo no había considerado a las bases para convocar al bloqueo de caminos. Si bien en dichas movilizaciones el sector aymara del altiplano paceño apoyó militantemente, la convocatoria a movilizaciones en agosto de 2003 por el mismo líder resulta ser un fracaso, pues no respondía a demandas incumplidas sino a ésta disputa interna de liderazgos por el control de la instancia nacional⁵¹.

Este *distanciamiento entre las bases y la dirigencia nacional* tiene que ver con la limitación de éstos últimos de articular las reivindicaciones que hacen a la política sindical campesina con las demandas, intereses y proyecciones de tipo político partidario. Pues, la propia dinámica política partidaria boliviana, basada en la cultura de la confrontación, del caudillismo, de la burocratización de las acciones, provoca y reproduce el distanciamiento entre los intereses político partidarios de los líderes y las necesidades y demandas de las bases, pese a los esfuerzos de la dirigencia nacional.

Por ejemplo, en el proceso pre y postelectoral los lideratos indios entraron a la lógica electoral sobreponiendo los intereses político partidarios por sobre las demandas sectoriales de sus bases, por tanto no pudieron efectivizar la "materialización" de demandas que ponían en cuestión la sobreposición de los intereses de las élites por sobre los derechos de estas poblaciones en calidad de originarios⁵².

En el afán de una representación más allá de los sectores que les dieron legitimidad se enfocaron en la búsqueda de demandas o articuladoras de la acción colectiva intersectorial que, si bien afectan al conjunto de la población, las poblaciones campesinas/indias aún no logran "sentirlas" y "palparlas" como una problemática de su cotidianidad inmediata.

La defensa de Gas como recurso natural estratégico, la oposición al ALCA, la

demanda de recuperación de los recursos estatales capitalizados pasaron a convertirse en los nuevos elementos de lucha india, desde las dirigencias, a partir de los cuales se intentan construir demandas de carácter nacionalista e interpeladoras a otros sectores sociales, sobretudo urbanos.

Así, problemáticas no superadas, como el tema de la tenencia de la tierra -ni la dirigencia vinculada al MAS ni al MIP han logrado replantear una propuesta alternativa a la Ley INRA-, la demanda de desarrollo rural -que el MAS lo supedita a la defensa de los recursos naturales en general, mientras que el MIP lo instrumentaliza para doblegar al gobierno central-, e incluso la defensa de la coca y la demanda de autodeterminación fueron supeditadas a demandas estratégicas que vinculaban los intereses reivindicativos de las bases indias con la necesidad de consolidar sus instrumentos políticos.

Por tanto, en ese periodo se genera una especie de “sacrificio”, consensuado o no, de las necesidades cotidianas de las bases campesinas/indias expresadas en demandas corporativas por demandas políticas “nacionales” o globales que permitan mantener y fortalecer las alianzas intersectoriales pre-electorales. Esto conlleva una ventaja y a la vez una desventaja, por un lado, permiten articular o ampliar la influencia india en los sectores sociales populares no indios, pero por otro, al no ser aprehendidas como necesidades cotidianas tienen a ampliar el distanciamiento entre las bases y las dirigencias.

Otro elemento que incide en el distanciamiento entre los actores de un mismo movimiento es la actual *burocratización del accionar político de la dirigencia* vinculada a la política institucionalizada, debilitando un elemento innovador de estos instrumentos políticos indios: el de generar espacios de interlocución y deliberación entre bases campesinas y diputados uninominales, para fortalecer y ampliar la acción colectiva hacia el ámbito de la política pública.

Sólo en el Trópico de Cochabamba y en algunas circunscripciones rurales, los diputados indígenas establecieron espacios de deliberación con sus bases; en las otras regiones, rurales como peri-urbanas, se empieza a expresar las desesperanzas sobre las nuevas formas de hacer política no-incluyentes de las bases electoras. Esta situación plantea el riesgo de revertir lo ya superado, la percepción de que el indio no tiene capacidad para manejar la institucionalidad q'ara, o de que el indio llegado al poder se “blanquea” para negar a sus semejantes.

Sin embargo, esta tendencia al distanciamiento entre bases e intereses sindicales y dirigencias e intereses político partidarios y de “contraimiento temporal” del movimiento, no ha disminuido el empoderamiento de las bases campesinas/indias, sobretudo, del occidente del país. Por ello, se hace cada vez más difícil movilizar a las bases con fines caudillistas o contenerlas cuando éstas entran en movilización, lo que constituye un indicador de una posible superación de los caudillismos dentro del movimiento indio, como resultado de la ruptura de las relaciones patrimoniales de éstos con los criollos-mestizos, como también en relación a los indios “blanqueados”.

Esta etapa de contraimiento “temporal”, también tiene que ver con los resultados de esta “experimentación” de entrar en el plano de lo político institucionalizado.

Participación de los Indios en el Parlamento

A un año de gestión parlamentaria las organizaciones sociales y las bases campesino/indias afirman que la actuación de sus representantes en el Parlamento fue relativamente pobre a lo esperado. Si bien los parlamentarios del MAS como del MIP presentaron más de 70 propuestas de Ley ninguna fue aprobada⁵³, tampoco se pudo frenar la aprobación de leyes que desvirtúan los logros alcanzados en las movilizaciones del 2000, como la sustitución de Seguro de Salud Indígena por el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI)⁵⁴, o la aprobación de modificaciones a normas (Ley INRA, Ley 1008, otros) que permita avanzar en la superación de conflictos entre gobierno y sectores indios movilizados.

Esta pobreza de resultados esta relacionada con las múltiples contradicciones o factores inhibidores de la participación política india en el plano de la acción institucionalizada del Parlamento que reproduce no sólo la cultura política prebendal y excluyente, sino las relaciones coloniales de subordinación y discriminación racial. Dichas contradicciones, muchas veces, se reproducen a nivel interno, dentro de los mismos instrumentos políticos.

a) Factores inhibidores internos: condiciones de articulación de lo diverso

La articulación de los instrumentos políticos indios, sobretudo en el caso del MAS, con sectores políticos “no indios” en base al encuentro de intereses y posiciones políticas que resultó en el proceso electoral, no fue y no es aún muy efectiva a nivel de la acción política institucionalizada, por la débil ligazón político-ideológico que se establecieron y que no les permite formular propuestas sólidas en un escenario donde el principal elemento de confrontación es la “disputa de ideas”, pues es el Parlamento el ámbito político donde se gestan los “contratos sociales” (Morales, 2003).

Para el MAS las múltiples posiciones políticas en su interior -leninistas, trostkistas, guevaristas, maoístas, indigenistas, kataristas, indigenistas, etc.- se convierten en un obstáculo para plantear una propuesta política coherente de país que pretende refundar, mostrando, por tanto, una ambigüedad en su horizonte político y en sus propuestas ideológicas. Así, la condición aglutinadora que se presentaba como una ventaja y virtud del MAS, se constituye también en su desventaja, por lo menos en tanto no logre consolidar y consensuar una postura político ideológica englobadora.

Si bien sus documentos políticos, elaborados por los asesores y líderes políticos muy vinculados a los grupos de izquierda “q’ara” que se articularon en el proceso electoral, recuperan el consenso sobre la necesidad de refundar el país, de recuperar la función benefactora y planificadora del Estado y de recuperar los recursos públicos

“capitalizados” en beneficio de “ todos los bolivianos”, no se tiene una posición clara sobre el tipo de Estado-Nación que se pretende consolidar.

Mientras las fracciones izquierdistas plantean la constitución de un Estado “socialista” pluricultural recuperando en el mejor de los casos los principios de la cultura andina para promover una “economía solidaria” basada en el desarrollo productivo de las actividades pre-capitalistas (la agricultura); otras fracciones más vinculadas a las dirigencias campesinas intermedias, nutridas e influenciadas por el katarismo de los años 70, plantean una refundación del país enfocado hacia un Estado plurinacional y comunitarista, que recupere los sistemas económicos andinos en función de una economía mixta y una “revitalización de las formas de organización y producción ancestral”.

Tampoco existe consenso sobre una de sus principales demandas, la Asamblea Popular Constituyente, sustentada sobretodo por la “vieja” izquierda o “izquierda q’ara” del partido, como la instancia necesaria que permita definir el tipo de Estado-Nación y modelo económico que quiere construir el “pueblo en el poder”. En cambio, los indianistas representantes de comunidades tradicionales plantean la Asamblea de Nacionalidades, como la única instancia que los reconocería como formaciones societales, como naciones dentro de una Nación.

Estas y otras contradicciones dificultan a la dirigencia de este instrumento político construir un discurso articulador que permita consolidar una identidad colectiva en su interior, a partir del cual se proponga proyectos políticos enfocados a su objetivo de transformar el Estado, vía participación política institucionalizada.

Contrariamente a la consideración de García L quien plantea que estas “nuevas izquierdas” están produciendo un “modelo alternativo de sociedad” (2003:3), los datos nos muestran que estas contradicciones impiden la construcción de propuestas alternativas o esta construcción se reduce a un cuestionamiento y rechazo del modelo actual y a consideraciones aún abstractas de modelos socialistas o modelos ancestrales donde tampoco hay un consenso claro. Lo que constituye una de sus principales limitaciones.

Sin embargo, existe un predominio de las posturas izquierdistas “q’aras” reflejadas en las acciones y demandas de tipo antineoliberal y antiimperialista sobre las propuestas indianistas e indigenistas del MAS. Al respecto, el componente étnico-cultural, si bien aparece en los documentos políticos, en la propuesta de gobierno y en los discursos de los líderes, se va minimizando o se reduce sólo al plano de lo retórico.

Lo anterior tiene que ver también con la reconfiguración del tejido social al interior de este instrumento político, pues ahora son los “otros” líderes políticos incorporados en la última coyuntura electoral que se constituyen en el primer círculo dirigencial del MAS o dicho de otra manera, en la “cúpula política”, desplazando a un segundo plano a las dirigencias campesino/indias intermedias que promovieron su gestación. Un indicador a nivel de los representantes parlamentarios es que los cargos

jerárquicos que les corresponde como partido opositor, están siendo cubiertos por los representantes de la “vieja” izquierda, mientras los indígenas parlamentarios ocupan cargos secundarios.

Así, la disyuntiva al interior del MAS que no logra definir una línea rectora, en términos ideológico-políticos y de propuestas de construcción de nación, y la prevalecencia de las “opiniones” de gente de la “vieja” izquierda, sobre las posiciones de los representantes indígenas tiende a descorporarlo como instrumento político indio para constituirlo en un partido político de izquierda con bases indias pero controlados por “no indios”, aunque su líder máximo siga siendo “indio”.

Esta situación, tiende a reproducir las relaciones coloniales basadas en la subordinación étnica y de raza, pues los intelectuales de izquierda se constituyen en los interpeladores y detentores del “saber” frente a dirigencias cuyas capacidades se ven limitadas al no lograr alcanzar –por su condición de excluidos- un “capital cultural” suficiente que les permita un manejo de la política pública, aunque no se les desconoce su legitimidad y su capacidad de convocatoria necesaria para recrear las posiciones antineoliberales de la izquierda q’ara.

Sin embargo, estos desencuentros al interior del MAS, a nivel de la bancada parlamentaria, generó un sentimiento de exclusión y marginalidad del indio dentro de su propio instrumento que ha desembocado en la formación de un “bloque indígena” dentro del MAS, que pretende reposicionarse en su instrumento político y tener un rol más protagónico dentro del Congreso Nacional, aglutinando representantes indígenas de otros partidos políticos opositores u oficialistas, para materializar lo que simbólicamente está dado: la inclusión india en el Parlamento⁵⁵. Si esta propuesta se presenta innovadora aún queda por superar las barreras internas de sus propios instrumentos, como el asumir una postura de partido en desmedro incluso de sus propios electores.

b) Las prácticas políticas instituidas

El “manejo de la institucionalidad ” y los “códigos de sociabilidad” constituyen otros elementos inhibidores de la participación política de los representantes indios. A excepción de los intelectuales de la “vieja” izquierda, los Parlamentarios indios son líderes que surgieron de las bases atravesando los distintos niveles de la escuela sindical.

Muy pocos parlamentarios indios concluyeron la educación secundaria y muy pocos más acumularon un “capital cultural” competitivo. Por tanto, su conocimiento político se remonta al conocimiento político-sindical y al manejo de las prácticas políticas de sus formaciones societales y no cuentan con conocimientos que les permitan manejar la institucionalidad política, como el manejo de normas, conocimientos especializados, discursividad apropiada e incluso- como menciona García L⁵⁶- el manejo de los instrumentos mediáticos para proyectarse hacia la sociedad civil y permitir legitimar sus ideas y propuestas.

A esta limitación se suma el estigma sobre lo “indio”, pues pese a su categoría de “Padres de la Patria” no dejan de ser “indios” y por tanto sujetos de exclusión y de discriminación. Una de las instancias más excluyentes son los medios de comunicación, como instrumentos mediáticos controlados por las élites políticas que, cuyo manejo de la información suele generalmente mostrar los “errores” lingüísticos o de actitudes y comportamiento de los representantes indios, a quienes se reconoce su carácter “folclórico” pero no sus capacidades como de líderes políticos. Por tanto, el sistema político actual que no logra incluir a estos actores políticos desde sus propias prácticas políticas reproduce “racismo estructural”.

Así y pese al un punto de “inclusión política” lograda en las elecciones 2002 se reproduce lo que Tapia define como la “estigmatización política”, una forma de marginalización o exclusión que se ejerce estableciendo un cierre cultural en torno al reconocimiento de la plenitud e igualdad de derechos y oportunidades políticas que comparten los que participan del modelo de normalidad (Tapia, 2002a:105). Este cierre sociocultural impide a los representantes políticos de la “indianidad”, que manejan códigos lingüísticos, formas de organización y de desempeño político distintos a los empleados en la política pública, hacer del Parlamento el escenario de confrontación política que esperaban.

Otro factor de inhibición es el “rodillo parlamentario”⁵⁷ que impide la aprobación e incluso discusión de propuestas de los partidos indios (desde propuestas de Ley hasta propuestas de interpelación a ministros de gobierno por actos cuestionables), pues aunque constituyen la primera fuerza opositora son aún una minoría parlamentaria. Lo anterior conlleva a una temprana frustración y constatación de que el sistema político reproduce las relaciones de poder de una sociedad que los subordina.

“Los 34 diputados que somos en el parlamento (27 del MAS, 6 del MIP y 1 de PS) son votos sagrados, pero ¿qué pasa dentro el parlamento? ¡nada!, claro que las cosas que se plantea lo ponen en consideración, tenemos que discutir hablar, pero finalmente no pasa nada, alzan la mano los alzamanos y todo lo que hemos discutido, no se corrige ni una coma y se aprueba lo que el poder ejecutivo ha presentado” (F. Quispe)

Ante esta constatación dos son los posicionamientos tomados por los representantes políticos indios: 1) desestimar la participación institucionalizada y repensar en la “revuelta social” como la vía de transformación y acceso al poder “real” y, 2) la necesidad de redireccionar las acciones políticas para lograr una mayoría parlamentaria que permita controlar el poder legislativo y ejecutivo.

La primera postura es retomada por el MIP, éstos constataron que optar por los espacios institucionalizados no constituye un medio para la transformación de las relaciones de poder y el control del aparato estatal. Por tanto, consideran que la única vía para revertir el racismo estructural, “el uso de la discriminación que

mantienen a las élites en el poder” (CEDLA, 2002:28), es la “revuelta social” o el “pachakuti”.

En esa perspectiva, la participación en el Parlamento constituye en un ejercicio para conocer la “hermenéutica” de las prácticas políticas que se quiere transformar. Su accionar político no reside en la “disputa de ideas” en el Parlamento, sino en cómo revitalizar la necesidad de cambio de las relaciones coloniales de subordinación societal explicitadas en las revueltas del 2000 e internalizadas en las poblaciones aymaras a partir de sus frustraciones actuales.

En cambio el MAS recupera la segunda postura, partiendo de la posición de transformar las relaciones de desigualdad social desde el control del aparato estatal. Su objetivo político-partidario inmediato es ampliar la cobertura electoral para lograr mayor control de la política pública, como estrategia de modificación de las relaciones de poder.

Si las movilizaciones del 2000 al 2002 contribuyeron al logro electoral del MAS, la profundización de la crisis económica, la situación de intranquilidad social por los brotes de “levantamientos de masas” sin liderazgos claramente definidos, la percepción de quienes ven la “protesta social” como un obstáculo y causa de la crisis -muy bien trabajada por los medios de comunicación en manos de la élite política-, constituyen condiciones políticas adversas a la proyección político partidaria a partir de la acción colectiva, lo que está llevando coyunturalmente a un contraimiento y contención de la capacidad movilizadora del sujeto colectivo que dio origen a este instrumento político.

Por ejemplo, durante el primer semestre de gestión parlamentaria los representantes indios optaron por la “negociación” y el “diálogo” con el gobierno sin lograr resultados favorables. Por otra parte, en un contexto de inestabilidad social, como la convulsión social que se produjo en febrero de 2003⁵⁸, y a la cada vez mayor criminalización y estigmatización de la protesta -desde iniciar procesos judiciales contra los dirigentes campesinos/indios hasta censurar legalmente la protesta social⁵⁹-, a un año de gestión parlamentaria el movimiento cocalero, base social del MAS, ha protagonizado sólo un conflicto social de carácter localista y sectorial (a principios del 2003) con resultados negativos, varios muertos y nuevas mesas de diálogo que se diluyeron en el tiempo, pese al apoyo del “Estado Mayor del Pueblo” como una instancia social que intenta aglutinar a los diferentes sectores sociales organizados⁶⁰.

Así, paradójicamente a los factores que permitieron la “victoria política” del indio en el campo de la política institucionalizada, las luchas indias previas que constataron la actual ruptura del “pacto social” indio-élite, la articulación entre alta dirigencia sindical y bases empoderadas, las dirigencias ahora convertidas en líderes políticos están optando por la “contención temporal de la protesta” como un “sacrificio” del movimiento para tener una participación política decisoria que no lo lograron con el 26% de representación parlamentaria actual.

Los costos de esta estrategia política en un contexto donde aún no se está

definiendo los nuevos “pactos sociales” tienden a tomar dos rumbos: Por un lado, desmovilizar la acción colectiva de la indianidad a partir de la profundización del distanciamiento entre la dirigencia político-sindicales y las bases –desesperanzadas por los intentos frustrados de modificar su situación de subordinación a través de la participación institucionalizada-, conllevando a la separación del instrumento político del movimiento social que lo contiene. Por otro lado, siendo que esta nueva fase de las luchas indias esta marcada por un empoderamiento de las bases, una superación de los caudillismos por lideratos intermedios, la constatación de la ruptura del pacto patrimonial, pueden, nuevamente, redireccionar la acción política de la indianidad hacia los no lugares de la política instituida para transformar el orden social desde la sociedad y de allí transformar el Estado.

CONCLUSIONES

Como hemos analizado a lo largo del artículo, los resultados electorales 2002, además de representar una victoria política y moral para este sector social campesino/indio, hacen evidente el proceso de cambio de la configuración sociopolítica que esta atravesando la sociedad Boliviana, fundamentalmente por los efectos poco favorables o más bien negativos de la implementación de las políticas económicas de corte neoliberal que ha afectado a la estructura social en su conjunto.

La acción política india expresada en las luchas sociales de los dos primeros años del nuevo milenio no constituyen sólo movimientos identitarios, como fue el caso de los años 80’ y 90’ donde los indios buscaba ser reconocidos en su diferencia, sino constituyen movimientos políticos y de sociedad que, más allá de las demandas coyunturales, están interpelando al Estado y demandan una transformación del orden societal.

Las luchas indias de principios del milenio constituyen la expresión de la ruptura del pacto patrimonial o del “contrato social” que había permitido perseguir un proyecto de construcción de nación que no logró concretizarse con la apertura del nuevo modelo económico. Los efectos sociales, políticos, culturales, económicos de ésta implementación han concretizado la ruptura de dicho pacto, incidiendo en el desvanecimiento definitivo de la memoria histórica corta –el “blanqueamiento” del indio tras el objetivo de ser integrado a una sociedad mestiza criolla- y el reencase de la memoria histórica de larga duración –“el indio como nación y raza”, el “indio con poder”-. Así, estos dos elementos “el indio como nación” y “el indio con poder” –con capacidad de influencia en la construcción de nación- constituyen el referente de interpelación al Estado y a la sociedad en la búsqueda de construir una nación que no sólo los incluya sino que se construya a partir de la pluralidad que expresan.

A partir de estas recuperaciones, de la constatación de las rupturas, la reafirmación de la identidad colectiva, de la articulación de sus luchas, sus disputas internas, el movimiento de la indianidad actual representa una superación de los liderazgos caudillistas y una retoma del poder de decisión en liderazgos intermedios y en las bases que conforman el movimiento. De ello, que el componente político ideológico

en torno a cómo y desde dónde plantear la modificación de su condición de formaciones societales subalternas esta más internalizada en las bases, permitiendo la correlación entre estrategias de acción que articulan lo expresivo-simbólico y lo racional-estratégico, de la acción política india.

Así, se puede entender la dinámica del movimiento, de desplazarse de la movilización social hacia la consolidación de instrumentos políticos indios que constituyen la prolongación del movimiento social hacia los lugares estables de la política, y de estos hacia la movilización.

Por otra parte, los resultados electorales muestran la reconfiguración de las luchas sociales, donde la acción política india se constituye en la fuerza movilizadora y articuladora de los diferentes movimientos sociales sectoriales, en tanto no sólo interpela y demanda una modificación de su posición en la estructura social, también interpela el accionar de un sistema político desgastado y un modelo económico que parece haber entrado a un periodo de debacle. Por tanto, no sólo los partidos de izquierda deben considerar, o tomar en cuenta a los indios, como plantea García L (2003: 2), sino también los movimientos sociales de diferentes sectores de la sociedad, principalmente urbanos requieren de la alianza de los indios para lograr demandas de tipo estructural y no solo coyuntural y sectorial.

La virtud de estos instrumentos políticos indios, sobretodo del MAS, reside en su capacidad articuladora no solo de diferentes sectores sociales, sino de los sectores indios que constituyen una heterogeneidad, articulados no entorno a un liderato sino entorno a objetivos comunes: participación política, transformación de su situación de marginalidad, discriminación y subalternidad. Mientras esta articulación se genere a partir de objetivos comunes y no de intereses caudillistas, estos instrumentos políticos tienden a fortalecerse, de lo contrario las fragmentaciones serán una constante y característica de ellos y de los sistemas de representación social de este sector.

Las practicas políticas institucionalizadas contrarias a permitir una real inclusión política del indio en el sistema político inhiben su participación y, en tanto tal, parecen constatar que participar en las reglas del juego de la democracia representativa, a decir de Patzi (1999:250), reproducen los esquemas de dominación que, a su vez, son legitimados por la participación de los actores excluidos en condición de desigualdad. Por tanto, estos factores inhibidores de la participación india en la institucionalidad pública, solo podrán ser superados en tanto el sistema político permita a los representantes indios participar con sus propios mecanismos y practicas políticas, en condición de diferentes pero no desiguales.

La situación algo contradictoria entre contraimiento de la movilización desde las dirigencias, y explosiones de protesta desde las bases campesinas/indias, e incluso la dinámica conflictiva al interior del movimiento indio, también ponen en evidencia la ruptura del “pacto social” patrimonial. De ello, la acción política india -expresada en instrumentos políticos, en sistemas de representación y en estrategias de movilización-, está expresando esta ruptura y al mismo tiempo, la necesidad de un

nuevo “pacto social” desde los sectores excluidos y marginados, pero a partir de la transformación de las reglas del juego, del orden social y político vigente, que modifique su situación de discriminación racial y de subordinación como formación societal.

En tanto no se concretice un nuevo “pacto social”, con el protagonismo y la modificación de la posición subordinada que ocupa el sujeto indio en la estructura social boliviana, el movimiento indio en actual etapa de “contraimiento temporal”, tiende a protagonizar nuevas “rebeliones” que pueden ser mucho más agudas de las que se generaron en los últimos años, más aún cuando lo étnico y lo racial refuerzan la identidad política de este sujeto.

Si bien los sectores de la indianidad están demandando transformación del orden social y político, desde sus diferentes propuestas y posiciones -sea la “revuelta social”, la victoria electoral, e incluso el reconocimiento de su diferencia por el Estado de derecho actual-, aún no tienen claro cómo construir la Nación a partir de la pluralidad tanto política como económica, que también se demanda. Si bien se tiene avances en torno a la pluralidad política, reconociendo formas de autogestión, de sistemas normativos, de autoridad, etc., no se tiene resuelto cómo esta pluralidad puede concretarse en el tema económico, siendo que estos sectores de la indianidad han reproducido sus economías locales, por un lado y por otro, se han insertado en la economía global en condiciones de desigualdad y de explotación, y cómo estas formas económicas, comunitarias o locales pueden interactuar en mejores condiciones en una economía global, cualquiera que fuese.

Por último, las aproximaciones expresadas en el presente artículo, sobre una realidad tan compleja como Bolivia, constituye un proceso de análisis inconcluso más aún cuando los últimos sucesos conflictivos, como “Octubre Rojo” 2003, al que nos vimos enfrentados los bolivianos en este nuevo milenio, cuestionan con mayor fuerza las contradicciones profundas y estructurales de esta sociedad, y nos ubican en una situación de incertidumbre generalizada sobre el proyecto de sociedad y de nación que se intenta construir.

BIBLIOGRAFIA

- Albo, Xavier; equipo CIPCA 1999 Ojotas en el poder local: Cuatro años después. Cuaderno de investigación CIPCA No. 53. (La Paz: Ed. HISBOL – PADER – CIPCA)
- Albo, Xavier 1999 “Etnias y Pueblos Originarios. Diversidad Étnica, Cultural y Lingüística”. En: *Bolivia en el Siglo XII. La Formación de la Bolivia Contemporánea*. Pp 451-483 (La Paz-Bolivia: EDOBOL)
- Barrera, Augusto 2002 “El movimiento indígena ecuatoriano: ente los actores sociales y el sistema político”. *Protesta, resistencia y movimientos sociales*. Revista Nueva Sociedad No. 182. Nov.-Dic. 2002. (Caracas-Venezuela: Nueva Sociedad. Pp. 90-105)

- Calderón Fernando; Dandler, Jorge (comp..) 1984 Bolivia: La Fuerza Histórica del Campesinado. (Cochabamba: UNRISD – CERES)
- Calderón, Fernando 1999 “Un siglo de Luchas Sociales” en: *Bolivia en el siglo XX. La formación de la Bolivia Contemporánea* (La Paz-Bolivia: EDOBOL.)
- Camacho, Natalia 1999 “La marcha como táctica de concertación política” En *“Empujando la Concertación. Marchas campesinas, opinión pública y coca.* Coord. Roberto Laserna. (La Paz: PIEB-CERES)
- CEDLA 2003 Clase Quebrada en *La Prensa*, 11 de mayo de 2002 (La Paz)
- COOPERACIÓN INTERNACIONAL, 2002 Informe de la Cooperación Internacional. (La Paz: Dic. de 2002)
- De la Garza Toledo Enrique 1994 “Las teorías de la elección racional y el marxismo analítico” En: *Estudios sociológicos del Colegio de México*. Vol. XII No. 35. (México D. F: Colegio de México)
- Dussel, Enrique 2001 Hacia una filosofía política crítica. (Bilbao. Ed. Desclée de Brouwer)
- Dussel, Enrique 2001 Ética de la Liberación en la edad de la globalización y de la exclusión.. (Madrid. 2da Ed. Trotta.)
- Espósito, Vanesa G. S/f Racismo ¿qué es exactamente? <<http://www.ecoportel.net/articulos/racismo.htm>>
- Faxas, Laura; Mayorga Rene 1986 Los movimientos sociales en Bolivia: Una experiencia metodológica de investigación (La Paz: CERES (manuscrito)
- Farinetti, Marina 2002 “La conflictividad social después del movimiento obrero”. *Protestas, resistencias y movimientos sociales*. Revista *Nueva Sociedad* No. 182 Nov. – Dic. 2002. Pp.:60-75 (Caracas-Venezuela: Nueva Sociedad)
- García L., Álvaro 2001 “Indios y Q’ aras: la reivindicación de las fronteras internas2. En Revista OSAL No..... (Buenos Aires: CLACSO)
- García Linera, Álvaro 2002 “El Ocaso de un Ciclo Estatal”. En *Democratizaciones Plebeyas*. pp. 147 – 176 (La Paz: Muela del Diablo)
- García Linera, Álvaro 2003 “Radiografía de las nuevas izquierdas. Potencialidades y limitaciones”. *Le Mond Diplomatique*. Año 1 No. 10, Julio 2003
- Grondi, Marcelo.1970 “Nación Aymara y Nación Boliviana” en: *Educación Popular para el desarrollo* La Paz, año 1 No. 3 Instituto de investigación cultural para educación popular.
- Gutiérrez, Raquel; García, Álvaro 2002 “El ciclo estatal neoliberal y sus crisis” En: *Democratizaciones Plebeyas* Pp. 9-24 (La Paz: Muela del Diablo.)
- INE 2002 Censo Nacional de Población y Vivienda 2001 (Formato disco compacto)
- Ibáñez Rojo, Enrique 1998 “Las razones del sindicalismo revolucionario boliviano” En: *Estudios sociológicos del Colegio de México*. Vol. XVI No. 47. (México D. F: Colegio de México)
- Iacono, Alfonso 2000 Raza, nación, pueblo: caras ocultas del universalismo Identidades comunitarias y democracia Ed. Silveira, Héctor Identidades comunitarias y democracia (Madrid:Trotta)
- Laserna, Roberto 1994 La Masacre del Valle. El desencuentro militar campesino (Cochabamba. Ed. CERES)
- Laserna, Roberto; Villarroel, Miguel. 1999 29 años de conflictos en Bolivia 1970 – 1998. (Cochabamba:. CERES) (informe Preliminar)

- León, Rosario 1990 “La cultura Política del Nacionalismo Revolucionario y la cultura como política en Bolivia” en *Búsqueda Revista Semestral de Ciencias Sociales. Año 1 No.1(Cochabamba: UMSS)*
- León, Rosario 2002 Informe Técnico: Hacia un Proceso Electoral Inclusivo. Cochabamba. Consorcio Por la Participación Ciudadana – DFID (manuscrito)
- Mayorga, Fernando 1991 “Sergio Almaráz y el discurso Nacionalista” *Búsqueda Revista Semestral de Ciencias Sociales. Año 2 No2-3 (Cochabamba: UMSS)*
- Morales, Juan Antonio; Pacheco, Napoleón 1999 “El retorno de los liberales. En: *Bolivia en el Siglo XII. La Formación de la Bolivia Contemporánea.* pp155-192 (La Paz-Bolivia: EDOBOL)
- Morales, Juan Antonio. 2003. Semanario Pulso., 14 de marzo de 2003 (La Paz)
- Oporto. Víctor 2002 Triunfo de los vilipendiados (La Paz: CITS)
- Patzi Feliz 1999 “Movimiento campesino indígena: drama y posibilidad (1983-1997). En: *Sociólogos en el umbral del Siglo XXI. II Congreso Nacional de Sociología* Pp.:233-252. (La Paz. Colegio de Sociología de Bolivia – Plural)
- Prada Alcoreza, Raúl, 2002. “Multitud y Contrapoder. Estudios del presente: Movimientos Sociales Contemporáneos” *Democratizaciones Plebeyas.* Pp. 73-146 (La Paz: Muela del Diablo)
- Reinaga, Fausto 2001 (1970) La revolución india (La Paz: Fundación Amautica “Fausto Reinaga”)
- Ricaldi, Víctor Hugo 1999 “La nación como discurso estatal” En: *Sociólogos en el umbral del Siglo XXI. II Congreso Nacional de Sociología.* Pp.:165-172 (La Paz: Colegio de Sociología de Bolivia – Plural)
- Rivera, Silvia 1984 Oprimidos pero no vencidos: Luchas del campesinado aymara y quechua 1900-1980 (La Paz: HISBOL-CSUTCB)
- Rivera, Silvia. 1993 La Raíz: Colonizadores y Colonizados. Coord. Albo, Javier; Barrios, Raúl *Violencias Encubiertas en Bolivia* (La Paz Bolivia: CIPCA-ARUWIYRI)
- Rivera. Alberto 1991 Qué sabemos del Chapare? (Cochabamba: CERES-CLACSO)
- Rodríguez, Gustavo 1993 “Bolivia: Economía y Sociedad, 1952-1992”. En: *Memoria Seminario taller Realidad Nacional y Desarrollo.* (Cochabamba: COOPI) (Manuscrito)
- Soto, César 1994 Historia del Pacto Militar Campesino: Entre la subordinación y la reciprocidad (Cochabamba: CERES)
- Seoane, José y Taddei, Emilio 2003 “Movimientos sociales, conflicto y cambios políticos en América Latina”, en OSAL (Buenos Aires: CLACSO) N° 9, Enero.
- Tapia, Luis 1999 “La conquista de la democracia: consigna de la plebe en tiempos modernos” *El Fantasma insomne. Pesando el presente desde el Manifiesto comunista.* (La Paz: Muela del diablo).
- Tapia, Luis 2002a “La condición multisocietal, multiculturalidad, pluralismo y modernidad”. La Paz: Ed. Muela del Diablo.
- Tapia, Luis 2002 b “Movimientos sociales, movimiento societal y los no lugares de la política” En: *Democratizaciones plebeyas.* Pp. 25-72 (La Paz: Muela del Diablo)
- Ticona, Esteban; Rojas, Gonzalo; Albó, Xavier 1995 Votos y Wipalas: Campesinos y pueblos originarios en democracia. *Cuadernos de investigación No. 43. Serie temas de la modernización* (La Paz: Fundación Milenio)

- Toranzo, Carlos 2002 “Bolivia. Nuevo escenario político”. En: *Protestas, resistencias y movimientos sociales. Revista Nueva Sociedad No. 182 Nov.–Dic. 2002* Pp.: 12-20 (Caracas-Venezuela: Nueva Sociedad)
- Zavaleta, René 1990 *La Formación de la Conciencia Nacional.* (Cochabamba: Los Amigos del Libro)
- Zalles, Alberto 2002 “De la revuelta campesina a la autonomía política: la crisis boliviana y la cuestión aymara” *Protestas, resistencias y movimientos sociales Revista Nueva Sociedad No. 182 Nov. – Dic. 2002* Pp.: 106-121 (Caracas-Venezuela: Ed. Nueva Sociedad)
- Zegada, María T, 2002. “Dinámica Política en el Trópico: Actores, conflictos y estrategias destructivas” En: *Seminario Futuro del Trópico de Cochabamba. Escenarios para el Desarrollo Sostenible.* (Cochabamba: UMSS-CEP)
- Zibechi , Raúl. 2000. “Los movimientos sociales latinoamericanos: tendencias y desafíos”. En : *Revista No 9 OSAL.* Ed. CLACSO. Pp.:185-188.

Fuentes hemerográficas:

- Revista 30 días de Noticias (publicaciones de Enero 2000 a marzo de 2003)
- Semanario Pulso (publicaciones de Enero 2000 a marzo de 2003)
- La Prensa (publicaciones de Enero 2000 a marzo de 2003)
- La Razón (publicaciones de Enero 2000 a marzo de 2003)
- Los Tiempos (publicaciones de Enero 2000 a marzo de 2003)
- El Diario (publicaciones de Enero 2000 a marzo de 2003)
- Correo del Sur (publicaciones de Enero 2000 a marzo de 2003)

NOTAS

* Lic. en Sociología, investigadora del Centro de Estudios de la realidad Económica y Social (CERES-Bolivia) y becaria del Programa de Becas CLACSO-Asdi para investigadores jóvenes de América latina y el Caribe, 2002 concurso “Movimientos sociales y nuevos conflictos en América latina y el Caribe” investigadora del Centro de Estudios de la realidad Económica y Social (CERES-Bolivia).

¹ El presente artículo no contempla el análisis de los conflictos sociales del 2003 (Febrero y Octubre) donde las poblaciones indias rurales y urbanas, sobretodo del departamento de La Paz, fueron los protagonistas de las movilizaciones que terminaron con la destitución del Presidente Gonzalo Sánchez de Lozada tras una año de gestión de su mandato.

² MAS-IPSP, surge en 1995 con el nombre de ASP (Asamblea por la Soberanía del Pueblo), entre las bases campesinas e indígenas del país articuladas a la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), la Confederación Sindical de Colonizadores de Bolivia (CSCB) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa (FNMC-BS), pero tiene su vanguardia social en las bases cocaleras del trópico de Cochabamba organizados en las 6 Federaciones de productores de Coca de Carrasco y Trópico de Cochabamba. Posteriormente y ante los obstáculos de la Corte Nacional Electoral por reconocer la sigla política de ASP y posteriormente de IPSP, optan por tomar la sigla ya legalizada de MAS del falangista Únzala de la Vega.

³ Que obtuvo el 20,94 %, dos puntos por debajo del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) quién ganó las elecciones con el 22,46%.

⁴ Es importante aclarar el uso del termino indio a lo largo del documento. Primero partimos de considerar la multidimensionalidad de la identidad de este sujeto político. En ese sentido, usaremos el término indio, sin comillas para connotar esta condición multidimensional, aclarando que nos referimos a su condición de clase de campesino y no otra, en este sentido, también hacemos uso del término campesino/indio. En cambio emplearemos el término indio, entre comillas, para resaltar la connotación estigmatizada de la condición racial de este sujeto.

⁵ Entre otros levantamientos indios se puede mencionar: la sublevación de Punata (1904), liderizada por Santos Marka T'ula, apoderado de los ayllus, kuracas y autoridades tradicionales, por la restitución de la Tierra / territorio de los Ayllus; el levantamiento y masacre de Jesús de Machaca (1921), los levantamientos en el Norte de Potosí (1927), por una República de Naciones y Pueblos Originarios, los enfrentamientos de Apiawayki Tumpa (1892) de los indígenas Guaraníes, y otros (www.puebloindio.org/CSUTCB3/html)

⁶ Pongo es el denominativo que se usaba para identificar la condición de servidumbre del indio al servicio de los hacendados durante la época de la oligarquía criolla.

⁷ La denominación como Katarista del movimiento indio, surgido a fines de los 60, constituye una recuperación y sobretodo homenaje a Tupaj Katari, héroe indio del siglo XVII que fue descuartizado en 1781 (Albó. 472:1999)

⁸ En términos político partidario, en 1978, la corriente Katarista del movimiento campesino/indio crea el Movimiento Indígena Tupaj Katari (MITKA), de cuya escisión surge el Movimiento Revolucionario Tupak Katari (MRTKL); el primero de corriente indianista que plantea “... la necesidad de la autodeterminación de las naciones originarias como la única posibilidad real de convivencia de la pluriculturalidad” (Patzí, 1999:238), y reivindica la identidad étnica por encima de la identidad campesina, la continuidad de un remoto pasado frente a la opresión y discriminación (Rivera, 1984); mientras que el MRTKL, mantiene su congruencia con la corriente sindical katarista, no encuentra incompatibilidad entre las reivindicaciones culturales y la adopción de un sistema de representación sindical (Ibid). Ambos partidos políticos indios participan en las elecciones de 1978 y en 1982 logran obtener, cada uno, una representación parlamentaria dentro del Congreso Nacional.

⁹ Entrevistas realizadas a ex dirigentes sindicales, hacen notar que en la década de los 70 la organización sindical se escindió hasta conformar 4 confederaciones sindicales que trataban de representar al sector indígena campesino, por un lado la Confederación Nacional de Trabajadores Campesino de Bolivia, controlados por el Gobierno Nacional, la Confederación Julián Apaza de la corriente Izquierdista y controlada por los el Movimiento de Izquierda revolucionaria (MIR), la Confederación de Campesinos con influencia del Partido Obrero Revolucionario (POR) y la Confederación Tupak Katari de corriente katarista conformada en 1971 y liderizada por Genaro Flores.(Entrevista a J. Apaza y R. Montevilla ex dirigentes CSUTCB)

¹⁰ La Unidad Democrática Popular (UDP) formada por la coalición de varios partidos de izquierda y con el apoyo popular llego al gobierno en 1982, marcando el retorno de la vida democrática boliviana, sin embargo, durante la gestión de gobierno (1982 -1984) se presento la peor de las crisis económica (la inflación llego al 22000%) como consecuencia de la crisis internacional, la baja del precio de estaño, como también de la mala administración de los gobiernos militares principalmente de la Dictadura de Hugo Banzer, donde la deuda externa deuda colapso la economía.

¹¹ Victor Paz Estensoro fue el líder político que asumió el poder en 1952 tras la victoria popular el 9 de abril del mismo año. Fue cuatro veces Presidente de la República y durante su última gestión, en 1985, promulgo el D.S 21060 que cambió la historia del Nacionalismo Revolucionario por una nuevo periodo de corte Neoliberal.

¹² Tres años después de su formación es gobierno de Jaime Paz Zamora que desarticula al EGTK, apresando a casi la totalidad de sus líderes, entre ellos Felipe Quispe, “el Mallku”, quien conmoviona a la prensa cuando una periodista le preguntaba sobre las razones de su lucha responde: “... para que mi hija no sea tu empleada...”.

¹³ Convenio 179 de la OIT

¹⁴ Varios análisis dan cuenta que la alianza MNR-MRTK, fue resultado no de una voluntad política, sino de un ejercicio de marketing electoral. La combinación de un q'ara, con un “indio”, que sea expresión de la mayoría india boliviana dio

sus frutos con la ascensión al gobierno en 1994 a 1997.

¹⁵ Se emplea el denominativo de tierras bajas para ubicar espacialmente a los diferentes pueblos indígenas que habitan regiones o ecosistemas tropicales, llanos, amazonía y chaco. Diferente a tierras altas que se utiliza para ubicar a los pueblos indígenas que habitan la región andina del país.

¹⁶ Retomando a Wolf, Patzi denomina “intermediarios culturales” a los grupos que median el sentir colectivo de las bases con el resto de la sociedad; son grupos que se encuentran en las articulaciones de las relaciones sociales, económicas y políticas, que conectan al movimiento con élites de mayor importancia en los centros de discusión o en las estructuras políticas. (Wolf en Patzi, 1999:238)

¹⁷ Esta primera movilización obligó al Gobierno de Paz Zamora a reconocer por Decreto Supremo a los que se constituirían en los primeros territorios indígenas legalmente reconocidos. En este proceso se beneficiaron siete pueblos indígenas, entre estos los Sirionos, Chimanes, Mutiétnico, Wednaye y Yuqui.

¹⁸ Esta capacidad de movilización, en interpelación al Estado, se explica desde estrategias como la movilización de masas como las marchas hacia la sede de gobierno (1994 y 1995), hasta la formación de comités de autodefensa, grupo de personas encargadas de prevenir e impedir la erradicación de cultivos convocando la población, como barrea humana; los bloqueos de senderos, para impedir el paso de los erradicadores; las marchas multitudinarias en centros urbanos, etc. (Camacho, 1999:18)

¹⁹ Según estudios de CEDLA y FAO, el 7% de los grandes propietarios agropecuarios concentran 93% de las tierras especialmente en las tierras bajas (amazonía, oriente, chaco), mientras que el 93% de los pequeños agricultores (campesinos / indígenas) poseen el 7%, lo que ocasiona una aceleración de la minifundización a un ritmo promedio de 16.000 minifundios por año (La Razón, 8 de octubre de 2003)

²⁰ Pachacuti significa para el mundo andino, aymara principalmente, la “revuelta” el cambio de una situación a otra. Hace referencia al cambio de la situación de subordinación en la que se encuentran los indios hacia la recuperación del poder como nación, el cambio de su posición en el orden social vigente desde el periodo colonial. Implica además un proceso paulatino y no repentino de cambio.

²¹ Alrededor de este conflicto se articulaban diferentes sectores sociales urbanos y rurales como los campesinos regantes organizados en la Federación de Regantes, campesinos cochabambinos organizados en la Federación departamental de Campesinos, los productores de coca del chapare, los fabriles, la COD y otros sectores no sindicalizados

²² La razón, 3 de abril; Presencia, 4 de abril

²³ Felipe Quispe es la Máxima Autoridad de la Matriz sindical del campesinado Boliviano, la CSUTCB. Pero el denominativo “Mallku” que lo identifica, expresa la máxima autoridad tradicional que ha llegado a dicho cargo atravesando los diferentes caros comunales, este no es el caso de Quispe pero su denominativo de “Mallku”, constituye en su nombre político que adoptó cuando era parte del EGTK.

²⁴ Utilizamos el término “indio” entre comillas para destacar la estigmatización que atribuye a este sujeto político, a partir de la condición racial del mismo.

²⁵ Entre Julio y septiembre de 2000 se protagonizan movilizaciones de diferentes sectores sociales como, la prensa registró un promedio de 10 frentes diferentes de conflictos, entre los principales: la Tercera marcha indígena hacia la sede de gobierno, que demanda nuevamente la titulación de sus tierras; la marcha del magisterio rural también a la sede de gobierno demandando el 50% de incremento salarial; la huelga de los policías que también demandaban incremento salarial, los cocaleros frente al plan dignidad del gobierno que pretendía concluir el año con “coca cero”; y otras protestas de otros sectores sociales, como los transportistas, los gremialistas (comerciantes)

²⁶ El “cato de coca” es una medida local de extensión de cultivo de coca equivalente a ¼ hectárea de terreno.

²⁷ Si bien el líder político Evo Morales llegó al parlamento en su primera gestión por el apoyo de los cocaleros y con el discurso de reivindicación de la hoja de coca frente a las políticas de erradicación, cabe aclarar que esta condición económica de cocalero no está desprendida de su condición étnica y racial que lo identifica como indio, es más si su desafuero estaba directamente relacionado con la lucha de su sector económico, el desafuero evidenció para la población popular la relación directa entre su identidad de indio, su condición étnica y racial, con la discriminación e injusticia que sufren quienes se y son identificados como tales. Por tanto, este acto fue interpretado como un acto de injusticia y discriminación hacia el común de la población: los indios.

²⁸ De acuerdo al Censo 2001 la población indocumentada en Bolivia asciende al 8% (INE, 2001). Sin embargo, según datos de la Dirección de Identificación Nacional administrada por la Policía Nacional este porcentaje ascendería a más de 25% de la población si se considera que la Cédula de Identidad es la que efectiviza la condición de ciudadanía de los individuos. Otros estudios consideran que sólo en el caso de los pueblos indígenas tanto de la parte andina como de la parte de tierras bajas este promedio asciende a más del 40%, en el caso etnias del país como los Chimanes, Yuquis la indocumentación llega al 98% de su población total.(CPC: 2002)

²⁹ Pulso No 60 Sep 2000

³⁰ Este concepto de capital cultural escolar que plantea Bourdieu es recuperado por García Linera para poner énfasis en la característica de las nuevas dirigencias campesinas como el resultado híbrido de la relación campo-ciudad y el manejo de saberes urbanos como rurales (Seminario Internacional sobre 50 años de Reforma Agraria y Movimientos Campesinos 3-4 de julio, 2003)

³¹ La reproducción de las prácticas culturales, políticas y económicas de estos pueblos indios está marcada por la influencia del periodo colonial y republicano, por ejemplo los sistemas de representación política expresan la coexistencia entre el ayllu y el sindicato, las prácticas económicas evidencian cómo los “indios” han entrado a la lógica de mercado, sin que ello implique un desplazamiento de sus prácticas económicas, sino una combinación de estas con la

lógica de mercado, a través de su incursión como comerciantes, contrabandistas, microempresarios, etc.

³² Declaraciones de un comunario “bloqueador”. La Razón, 23 de septiembre de 2000.

³³ Fauto Reinaga es uno de los intelectuales aymaras más radicales de los años 60-70, y es el primero en exponer la existencia de las dos Bolivias enfrentadas. La Bolivia de los q'aras y la Bolivia de los indios. Mucho de su pensamiento fue recuperado por los katariasta en los años 70

³⁴ Uno de los indicadores de esta reafirmación identitaria es que el 94% de estas poblaciones aymaras se autoidentifica como indígenas, según los datos del INE.

³⁵ García L. Habla de la “soledad social”, recuperando el termino de “soledad obrera”, utilizada por Zavaleta, para describir la orfandad social en la que actualmente, según el autor, se encuentra los indígenas aymaras del altiplano y los valles que están retomando el protagonismo político y conmoviendo la estructura estatal (García L. 2001. Este término también puede ayudarnos a describir la lucha solitaria de los productores de coca, que desde el 87 se han constituido en el sector de mayor resistencia ante las políticas estatales mientras el sector minero y los propios campesinos/indios estaban debilitados.

³⁶ *El Ayni* es un acuerdo comunal basado en transacciones recíprocas que se efectúa entre toda los miembros de una comunidad o entre redes familiares extensas. Se hace explícita en un sistema de trabajo de cooperación comunal mutua. El acto de reciprocidad consiste en que quién es favorecido devuelve el favor participando en las actividades del que le favoreció.

³⁷ La teoría de la movilización como recurso, que concibe a la sociedad como un agregado de individuos, plantea la acción colectiva como una agregación de acciones individuales interesadas. Parte de los siguientes argumentos: las acciones colectivas son medios racionales para procurar beneficios; los objetivos de la misma se definen por los conflictos de intereses que se constituyen como relaciones de poder institucionalizadas; la emergencia de la movilización depende prioritariamente de cambios en los recursos, en la organización de grupo, siendo el liderazgo el factor fundamental. (Farinetti, 2002: 64)

³⁸ Zibechi, define la territorialización de los movimientos como “ su arraigo en espacios físicos recuperados o conquistados a través de largas luchas, abiertas o subterráneas”. A partir de concepto considera que los movimientos sociales en Latinoamérica están atravesando una reconfiguración del espacio físico, como la reubicación activa de los sectores populares en nuevos territorios ubicados a menudo en los márgenes de las ciudades y de las zonas de producción rural intensiva (Zibechi, 2003:185)

³⁹ Incluso otros autores como Albó consideran que la profundidad del conflicto se reflejó en la administración de los espacios municipales que habían logrado como ASP, en las elecciones municipales de 1995, cuando los Concejales y Alcaldes campesinos/indígenas empezaron a mostrar simpatía por uno de los líderes en pugna (Albo, et al, 1999: pg. 52-53)

⁴⁰ Entrevista a A. García Linera. Quinquenario EL Juguete Rabioso. La Paz; 7-20 de julio de 2000.

⁴¹ En 1992 aparece por primera vez la Wipala como símbolo de resistencia india frente a los 500 años de invasión española. Este símbolo, que en un principio aparecía en escenarios locales como parte del folclore, se constituye en uno de los símbolos más importantes que expresan a pruriculturalidad Bolivia.

⁴² Es interesante ver cómo esta corriente indianista adecua y funcionaliza los mismos elementos que rechazan como expresión de la colonialidad del poder. Por ejemplo, desconocen la institucionalidad de la CSUTCB porque consideran que ésta instancia es el resultado de la reproducción de las relaciones coloniales y que actualmente va perdiendo fuerza por el componente clasista que no logra recuperar el componente étnico cultural que demandan los distintos pueblos originarios o indígenas, sin embargo lo consideran útil y funcional en tanto para llegar a las bases indias requieren trabajar con los sindicatos campesinos como expresión organizacional inserta en la mayoría de las comunidades campesinas a nivel nacional.

⁴³ Dato extraído de la investigación en desarrollo “¿Adivina quién viene ha cenar?”:la Relación Donantes-Recipientes (R. León, 2003)

⁴⁴ Información extraído de la base de datos de la Corte Nacional Electoral.

⁴⁵ Confederación de Pueblos indígenas de Bolivia (CIDOB)

⁴⁶ Nueva Fuerza Republicana, partido que nace el partido político del Gral. Banzer, la Acción Nacionalista Democrática.

⁴⁷ Datos Instituto Nacional de Estadística, Censo de Población y Vivienda 2000

⁴⁸ El hecho de que la defensa de la coca no pueda convertirse en un elemento movilizador y articulador de otros sectores se debe a que si bien de manera indirecta influyó en la economía nacional, en los “bolsillos” de la ciudadanía en general, no constituye un “bien común” como es el caso del agua.

⁴⁹ Es importante mencionar que la intervención externa en el diseño de políticas del Poder Ejecutivo no sólo responde a las presiones de las instancias multinacionales como el Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, o de Estados Unidos, sino también se ha extendido a gran parte de la Cooperación Internacional, por la demasiada dependencia que tiene el país sobre estos financiamientos. Para poner un ejemplo, el Proyecto de Ley del llamado “Impuestazo” elaborado por el Poder Ejecutivo y que generó una convulsión social de magnitud alarmante en febrero del 2003, respondía a las “sugerencias” de la Cooperación Internacional para hacer ajustes en el sistema tributario y disminuir el déficit fiscal. (Informe de la Cooperación Internacional, Dic. de 2002).

⁵⁰ Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA), institución no gubernamental y de carácter académico.

⁵¹ El desatino de la convocatoria al bloqueo nacional de caminos convocada por Felipe Quispe en agosto de 2003, responde a un intento de consolidar su liderato y control de la CSUTCB ante la amenaza del Congreso Nacional de la CSTUCB organizado por las federaciones campesinas departamentales que respaldan al MAS como partido político.

⁵² De las más de 70 demandas ni el 20% han sido cumplidas ni por la gestión de Banzer-Quiroga, ni por la actual gestión gubernamental.

⁵³ Como excepción se tiene la aprobación de la Ley de la Trabajadora del Hogar que después de una lucha de más de diez años estaba siendo llevada a foja cero, pero la presión del sector afectado y los parlamentarios de los partidos opositores (MAS, MIP y PS) propiciaron su aprobación.

⁵⁴ Lo más rescatable del Seguro de Salud Indígena era que, por primera vez, el Estado y las poblaciones indias habían entrado en un verdadero *proceso intercultural*, en tanto el funcionamiento del mismo permitía combinación de la medicina científica-occidental y de medicina local, además de respetar usos y costumbres. Sólo funcionó 6 meses después fue distorsionada y posteriormente sustituida por el Seguro Universal Materno Infantil (SUMI), mostrando un reproceso en uno de los logros en el intento de articular saberes de las diversas formas societales existentes en el País.

⁵⁵ Parlamentarios campesinos/indígenas con larga trayectoria sindical nacional y que representan a sus Ayllus tradicionales en el Norte de Potosí, o a los Ayllus como Qaqachacas constituyen los gestores de este “Bloque indígena”, que pretende insertar lo étnico-cultural como identidad y como tema de agenda dentro del Congreso Nacional (Entrevistas: F. Vásquez, A. Ambrosio, F. Aura, R. Copa)

⁵⁶ A. García Linera, comentarios en el Programa Televisivo “Pentágono”

⁵⁷ El “rodillo parlamentario” hace referencia a la toma de decisiones dentro del parlamento a partir de las alianzas políticas de los partidos que forman parte de la Coalición gobernante, para facilitar la aprobación de propuestas de ley que provienen del Poder Ejecutivo.

⁵⁸ Esta convulsión social por el “impuestazo” (proyecto de ley que incrementaba los impuestos como alternativa para disminuir el déficit fiscal. generó más de 33 muertos en dos días de violentos enfrentamientos entre militares y política, además de saqueo y quema de instituciones públicas por “masas sociales” no vinculadas a ningún tipo organización social en específico.

⁵⁹ La reciente Ley de Seguridad Ciudadana censura el bloqueo de camino que, siendo una estrategia de protesta por tanto una expresión del derecho político, es calificado como una violación a los derechos ciudadanos.

⁶⁰ Falta analizar los últimos conflictos que se están desarrollando en el sector del altiplano Paceño, que se inició con una huelga de hambre de los dirigentes indígenas departamentales de La Paz (vinculados al MIP) y un bloqueo de caminos relativo, en dicha región, por la detención y enjuiciamiento de un dirigente aymara. Ante la falta de respuesta del Gobierno y la represión por parte del mismo para permitir la circulación de pasajeros detenidos en una de las localidades aymaras, que produjo un enfrentamiento entre campesinos y militares dejando un saldo de 7 muertos, se vive una radicalización con el bloqueo de caminos en dicha región, sin expandirse aún hacia otras regiones, pese a que este sector ha incorporado en el proceso del conflicto demandas como el rechazo a la venta de gas y el rechazo al ALCA, que se han constituido en las nuevas “banderas” lucha del sector cocalero y la dirigencia de MAS que sólo han optado por un estado de alerta y una consulta popular, pese a que la última manifestación realizada por diferentes sectores sociales se demandó movilizaciones inmediatas en rechazo a la venta del gas.